



Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

INE/CG1353/2018

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
ORDINARIO
EXPEDIENTE:
UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018
DENUNCIANTES: MARTÍN PAUL
CÁRDENAS AGUIRRE Y OTROS
DENUNCIADO: PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018, INICIADO CON MOTIVO DE SENDAS DENUNCIAS EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, POR SUPUESTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA INDEBIDA AFILIACIÓN AL CITADO INSTITUTO POLÍTICO DE DIVERSOS CIUDADANOS Y, EN SU CASO, EL USO NO AUTORIZADO DE SUS DATOS PERSONALES

Ciudad de México, 17 de octubre de dos mil dieciocho.

GLOSARIO	
Consejo General	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
Constitución	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Comisión de Quejas	Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
DEPPP	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral
DERFE	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores



Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

GLOSARIO	
INE	Instituto Nacional Electoral
LGIPE	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
LGPP	Ley General de Partidos Políticos
COFIPE o Código	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
PAN	Partido Acción Nacional
Reglamento de Quejas	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
Sala Superior	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Tribunal Electoral	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
UTCE	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral

ANTECEDENTES

I. Denuncias. En las fechas que a continuación se citan, se recibieron en la *UTCE*, trece escritos de queja signados por igual número de ciudadanos quienes, en esencia, alegaron la posible indebida afiliación, atribuida al *PAN* y, en su caso, el uso indebido de sus datos personales para tal fin:

No.	Quejoso	Fecha de presentación
1	Martín Paul Cárdenas Aguirre	13/02/2018 ¹
2	Linda Guadalupe Navarrete López	13/02/2018 ²
3	Mónica Ramírez Fortis	14/02/2018 ³

¹ Visible a foja 05 del expediente.

² Visible a foja 09 del expediente

³ Visible a foja 19 del expediente



Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

No.	Nombre	Fecha de presentación
4	José Adolfo San Román Santiago	19/02/2018 ⁴
5	Francisco Javier Ruiz Cruz	20/02/2018 ⁵
6	Ingrid Yamilet Santos Navarrete	20/02/2018 ⁶
7	Andrés López Lujan	20/02/2018 ⁷
8	Alfredo Andrés Meza Luna	21/02/2018 ⁸
9	Carlos Ocaña Corte	22/02/2018 ⁹
10	Tomasa Alarcón Elox	22/02/2018 ¹⁰
11	Luis Fernando Nava Águila	22/02/2018 ¹¹
12	Emmanuel Alonso López Bernal	26/02/2018 ¹²
13	Sinaí Navarro Aguilar	16/02/2018 ¹³

II. Registro, admisión y reserva de emplazamiento.¹⁴ Mediante acuerdo de siete de marzo de dos mil dieciocho, el Titular de la *UTCE* instruyó la integración del expediente en que se actúa, el cual quedó registrado con la clave **UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018**, como un procedimiento sancionador ordinario por la supuesta indebida afiliación y el uso indebido de datos personales para ese fin.

En el acuerdo en cita, se admitió a trámite el procedimiento ordinario sancionador, respecto de Linda Guadalupe Navarrete López, Mónica Ramírez Fortis, José Adolfo San Román Santiago, Francisco Javier Ruiz Cruz, Ingrid Yamilet Santos Navarrete, Andrés López Lujan, Alfredo Andrés Meza Luna, Carlos Ocaña Corte, Tomasa Alarcón Elox, Luis Fernando Nava Águila y Emmanuel Alonso López Bernal.

De igual forma, se recibieron dos escritos de Martín Paul Cárdenas Aguirre, no obstante, el mismo remitió copia ilegible de la credencial para votar, razón por la cual, en el citado proveído, se le formuló prevención a efecto de que remitiera copia

⁴ Visible a foja 33 del expediente

⁵ Visible a foja 41 del expediente.

⁶ Visible a foja 46 del expediente.

⁷ Visible a foja 55 del expediente.

⁸ Visible a fojas 62 a la 63 del expediente.

⁹ Visible a foja 68 del expediente.

¹⁰ Visible a fojas 76 a 77 del expediente.

¹¹ Visible a foja 84 del expediente.

¹² Visible a foja 92 a 93 del expediente.

¹³ Visible a foja 115 del expediente.

¹⁴ Visible a fojas 96 a 105 del expediente.



CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

legible de la misma, apercibido que, de no subsanarla se le tendría por no presentada la denuncia. En este tenor, al no atender la prevención, se tuvo por no presentada la queja de referencia, mediante proveído de dos de abril de dos mil dieciocho. Con independencia de lo anterior, el señalado ciudadano presentó nuevamente queja ante la 01 Junta Distrital Ejecutiva en Sinaloa de este Instituto, en la cual denunció la misma conducta en contra del *PAN*, admitiéndose a trámite, mediante Acuerdo de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, en el expediente **UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/109/2018**.

Posteriormente, mediante proveído de veinte de marzo de dos mil dieciocho¹⁵, se tuvo por recibido y se admitió a trámite el escrito de queja de Sinaí Navarro Aguilar.

En todos los casos, se reservó el respectivo emplazamiento hasta en tanto fueran compiladas y analizadas las constancias que integrarían dicho expediente, y se determinara la pertinencia o no de la realización de nuevas diligencias de investigación.

III. Diligencias de investigación preliminar. Con el propósito de allegarse de mayores elementos probatorios tendentes al esclarecimiento de los hechos denunciados, la autoridad instructora ordenó los requerimientos que se describen a continuación:

Fecha de acuerdo	Sujeto requerido	Oficio	Fecha de respuesta
07/03/2018 ¹⁶	<i>PAN</i>	INE-UT/2232/2018 ¹⁷	14/03/2018 Oficio ¹⁸ RPAN2-0102/2018
	<i>DEPPP</i>	INE-UT/2231/2018 ¹⁹	09/03/2018 Correo electrónico ²⁰

¹⁵ Visible a fojas 144 a 152 del expediente.

¹⁶ Visible a fojas 96 a 105 del expediente.

¹⁷ Visible a foja 122 del expediente.

¹⁸ Visible a fojas 164 a 230 del expediente.

¹⁹ Visible a foja 127 del expediente.

²⁰ Visible a fojas 138 a 139 del expediente.



Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

Fecha de solicitud	Suplente	Oficio	Fecha de respuesta
20/03/2018 ²¹	PAN	INE-UT/3540/2018 ²²	23/03/2018 Oficio ²³ RPAN2-0127/2018
	DEPPP	INE-UT/3541/2018 ²⁴	22/03/2018 Correo electrónico ²⁵
02/04/2018 ²⁶	PAN	INE-UT/3980/2018 ²⁷	Sin respuesta
24/04/2018 ²⁸	PAN	INE-UT/4886/2018 ²⁹	26/04/2018 Oficio ³⁰ RPAN2-0209/2018
16/05/2018 ³¹	PAN	INE-UT/7333/2018 ³²	22/05/2018 Oficio ³³ RPAN2-0281/2018

IV. Emplazamiento.³⁴ El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, se dictó acuerdo de emplazamiento al *PAN*, para efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a la conducta que se le imputó y aportara las pruebas que considerara pertinentes.

Cabe señalar, que para tal efecto se le corrió traslado con copia simple de todas y cada una de las constancias que integraban el expediente de mérito.

El acuerdo de emplazamiento se diligenció en los siguientes términos:

²¹ Visible a fojas 144 a 152 del expediente.

²² Visible a foja 159 del expediente.

²³ Visible a foja 268 a 297 del expediente.

²⁴ Visible a foja 163 del expediente.

²⁵ Visible a fojas 252 a 253 del expediente.

²⁶ Visible a fojas 308 a 314 del expediente.

²⁷ Visible a foja 317 del expediente.

²⁸ Visible a fojas 334 a 338 del expediente.

²⁹ Visible a foja 342 del expediente.

³⁰ Visible a fojas 345 a 354 del expediente.

³¹ Visible a fojas 357 a 361 del expediente.

³² Visible a foja 362 del expediente.

³³ Visible a fojas 383 a 396 del expediente.

³⁴ Visible a fojas 425 a 432 del expediente.



CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

Sujeto: Oficio	Notificación: Plazo	Respuesta
PAN INE-UT/9807/2018 ³⁵	Citatorio: ³⁶ 19 de junio de 2018. Cédula: ³⁷ 20 de junio de 2018. Plazo: 21 de junio al 27 de junio de 2018.	26/junio/2018 ³⁸

V. Alegatos.³⁹ Mediante acuerdo de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, se ordenó dar vista a las partes, con las actuaciones que integran el presente asunto, a fin de que formularan los alegatos que a su derecho conviniera, mismo que fue notificado conforme a lo siguiente:

Denunciado

Sujeto: Oficio	Notificación: Plazo	Respuesta
PAN INE-UT/10973/2018 ⁴⁰	Citatorio: ⁴¹ 03 de julio de 2018 Cédula: ⁴² 04 de julio de 2018. Plazo: 05 al 11 de julio de 2018.	10/julio/2018 ⁴³

Denunciantes

ID	Oficio	Notificación: Plazo	Respuesta
1	Linda Guadalupe Navarrete López INE/SIN/JDE01/VS/0687/2018 ⁴⁴	Citatorio: 28 de junio de 2018 Cédula: 29 de junio de 2018. Plazo: 02 al 06 de julio de 2018.	Sin respuesta
2	Mónica Ramírez Fortis INE-UT/10974/2018 ⁴⁵	Cédula: 04 de julio de 2018. Plazo: 05 al 11 de julio de 2018.	Sin respuesta
3	José Adolfo San Román Santiago INE/HGO/06JDE/VS/0469/2018 ⁴⁶	Citatorio: 16 de julio de 2018 Cédula: 17 de julio de 2018 Plazo: 18 al 24 de julio de 2018	Sin respuesta
4	Francisco Javier Ruiz Cruz INE-UT/10975/2018 ⁴⁷	Cédula: 16 de julio de 2018. Plazo: 17 al 23 de julio de 2018	Sin respuesta

³⁵ Visible a foja 436 del expediente.

³⁶ Visible a fojas 437 a 441 del expediente.

³⁷ Visible a foja 442 a 443 del expediente.

³⁸ Visible a fojas 448 a 452 del expediente.

³⁹ Visible a fojas 453 a 458 del expediente.

⁴⁰ Visible a foja 463 del expediente.

⁴¹ Visible a fojas 464 a 468 del expediente.

⁴² Visible de fojas 469 a 470 del expediente.

⁴³ Visible a fojas 482 a 486 del expediente.

⁴⁴ Visible a foja 538 del expediente.

⁴⁵ Visible a foja 475 del expediente.

⁴⁶ Visible a foja 550 del expediente.

⁴⁷ Visible a foja 511 del expediente.



**Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL**

**CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018**

No.	Quejoso. Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
5	Ingrid Yamilet Santos Navarrete INE/JD10-VER/2407/2018 ⁴⁸	Cédula: 05 de julio de 2018. Plazo: 06 al 12 de julio de 2018.	Sin respuesta
6	Andrés López Lujan INE-CD03-ZAC/1316/2018 ⁴⁹	Cédula: 02 de agosto de 2018 Plazo: 03 al 09 de agosto de 2018.	Sin respuesta
7	Alfredo Andrés Meza Luna INE/JD16-VER/1983/2018 ⁵⁰	Cédula: 05 de julio de 2018. Plazo: 06 al 12 de julio de 2018.	Sin respuesta
8	Carlos Ocaña Corte INE/JD-02/TX/0576/2018 ⁵¹	Citatorio: 13 de agosto de 2018 Cédula: 14 de agosto de 2018 Plazo: 15 al 21 de agosto de 2018.	Sin respuesta
9	Tomasa Alarcón Elox INE/JD08-VER/1692/2018 ⁵²	Cédula: 06 de julio de 2018 Plazo: 09 al 13 de julio de 2018	Sin respuesta
10	Luis Fernando Nava Águila INE-JAL-JDE09-VE-0208-2018 ⁵³	Cédula: 17 de julio de 2018 Plazo: 18 al 24 de julio de 2018	Sin respuesta
11	Emmanuel Alonso López Bernal INE-35JDE-MEX/VS/210/2018 ⁵⁴	Cédula: 11 de julio de 2018 Plazo: 12 al 18 de julio de 2018	Sin respuesta
12	Sinaí Navarro Aguilar INE/JD10-VER/2407/2018 Por estrados ⁵⁵	Cédula: 06 de julio de 2018 Plazo: 09 al 13 de julio de 2018	Sin respuesta

VI. Elaboración del proyecto. En su oportunidad, al no existir diligencias pendientes por practicar, se ordenó elaborar el Proyecto de Resolución, para ser sometido al conocimiento de la *Comisión de Quejas*.

VII. Sesión de la Comisión de Quejas. En la Octogésima Quinta Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada el once de octubre de dos mil dieciocho, la *Comisión de Quejas* analizó y aprobó el proyecto de mérito, por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales Doctor Benito Nacif Hernández y Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, presentes en la sesión.

⁴⁸ Visible a foja 503 del expediente.

⁴⁹ Visible a foja 547 del expediente.

⁵⁰ Visible a foja 492 del expediente.

⁵¹ Visible a foja 564 del expediente.

⁵² Visible a foja 520 del expediente.

⁵³ Visible a foja 527 del expediente.

⁵⁴ Visible a foja 509 del expediente.

⁵⁵ Visible a foja 573 del expediente.



Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

CONSIDERANDO

PRIMERO. COMPETENCIA.

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la *Comisión*, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la presunta transgresión a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n), del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), t) y u) de la *LGPP*, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de datos personales, por parte del *PAN*, de los ciudadanos que han sido señalados en la presente determinación.-

Ahora bien, conforme al artículo 23 del *COFIPE*, los partidos políticos ajustarán su conducta a las disposiciones establecidas en el citado Código, correspondiendo al Instituto Federal Electoral —hoy *INE*— vigilar que las actividades de éstos se desarrollen con apego a la ley.

Del mismo modo, de conformidad con los artículos 341, párrafo 1, inciso a); 342, párrafo 1, incisos a) y n); y 354, párrafo 1, inciso a), del ordenamiento en consulta, los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en dicho Código, entre otras, el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 38 del dispositivo legal en cita, las cuales son sancionables por el *Consejo General*.



**Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL**

**CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018**

Dichos artículos se reproducen en los diversos 442, párrafo 1, inciso a); 443 párrafo 1, incisos a) y n); y 456, párrafo 1, incisos a), de la *LGIPE* y 25 de la *LGPP*, respectivamente.

En consecuencia, siendo atribución del *Consejo General* conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, resulta competente para conocer y resolver respecto de las presuntas infracciones denunciadas en el presente procedimiento sancionador ordinario, atribuidas a *PAN*, derivado, esencialmente, de la violación al derecho de libertad de afiliación y utilización indebida de datos personales.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada dentro del expediente SUP-RAP-107/2017,⁵⁶ en el sentido de que esta autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos ordinarios sancionadores relacionados con la presunta violación al derecho de libertad de afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos, esencialmente, por las razones siguientes:

- Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las autoridades, no a los partidos.
- Porque, por mandato legal, el *INE* es una autoridad que tiene potestad para imponer sanciones en materia electoral federal por violación a la ley.
- Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no excluye la responsabilidad de los partidos políticos por violación a la ley, ni la competencia del *INE* para atender tal cuestión.
- Porque la *Sala Superior* ya ha reconocido que el *INE* es el órgano competente para atender denuncias por afiliación indebida de ciudadanos.

⁵⁶ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf



**Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL**

**CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018**

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, inciso n), 459, 464, 467, 468 y 469, de la *LGIFE* —los cuales contienen reglas que ya se encontraban previstas en el COFIPE, en los artículos 342, párrafo 1, incisos a); 356, 361, 364, 365 y 366—, relacionados con lo dispuesto en los numerales 35, fracción III y 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*, es decir con base en el derecho humano a la libre asociación, en su vertiente de afiliación política.

SEGUNDO. NORMATIVA ELECTORAL APLICABLE AL CASO

En el presente asunto se debe subrayar que las presuntas violaciones al derecho de libertad de afiliación se cometieron **durante la vigencia del COFIPE**, puesto que la afiliación y/o renuncia de los quejosos Linda Guadalupe Navarrete López, Mónica Ramírez Fortís, Francisco Javier Ruíz Cruz, Alfredo Andrés Meza Luna, Carlos Ocaña Corte, Luis Fernando Nava Águila, Emmanuel Alonso López Bernal y Sinaí Navarro Aguilar al *PAN* se realizó antes del veintitrés de mayo de dos mil catorce, fecha en la cual se encontraba vigente dicho código.

En efecto, de conformidad con lo establecido en el Punto cuarto de los Lineamientos para la Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su registro, aprobados por el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral mediante Acuerdo CG617/2012, de treinta de agosto de dos mil doce, los Partidos Políticos Nacionales debían capturar en el *Sistema de Cómputo desarrollado por la Unidad Técnica de Servicios de Informática*, los datos de todos sus afiliados en el periodo comprendido **entre el uno de abril de dos mil trece y el treinta y uno de marzo de dos mil catorce**.

Por tanto, si al momento de la comisión de las presuntas faltas se encontraba vigente el *COFIPE*,⁵⁷ es claro que este ordenamiento legal debe aplicarse para las cuestiones sustantivas del presente procedimiento, al margen que las faltas pudieran haber sido advertidas por los quejosos y cuestionadas mediante las quejas que dieron origen al presente asunto, una vez que dicha

⁵⁷ El COFIPE estuvo vigente hasta el veintitrés de mayo de dos mil catorce



Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

norma fue abrogada por la *LGIFE*, así como que este último ordenamiento sea fundamento para cuestiones procesales o adjetivas.

Ahora bien, por lo que respecta a los ciudadanos José Adolfo San Román Santiago, Ingrid Yamilet Santos Navarrete, Alfredo Andrés Meza Luna y Tomasa Alarcón Elox, se tiene que la fecha de afiliación al partido político denunciado —ya sea reconocida por el propio partido político o proporcionada por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos— es posterior al veintitrés de mayo de dos mil catorce, de ahí que en esos casos, se aplicará la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para el análisis y sustanciación de esos supuestos que se denuncian en el presente expediente.

TERCERO. ESTUDIO DE FONDO

1. FIJACIÓN DE LA LITIS

En el presente asunto se debe determinar si el *PAN* violó el derecho de libertad de afiliación en su vertiente de afiliar indebidamente o no a los ciudadanos que alegan no haber dado su consentimiento para estar en sus filas, así como de no permitir o dar trámite a la solicitud de desafiliación presentada por un ciudadano, haciendo para ello uso ilegítimo de su información personal, en contravención a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIFE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *LGPP*.

2. MARCO NORMATIVO

A) Constitución, tratados internacionales y ley

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es necesario tener presente la legislación que regula los procedimientos de afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos, específicamente por lo que respecta al



**Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL**

**CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018**

denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos personales de los particulares.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 6

...

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: ...

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

...

Artículo 16.

...

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

...

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

...

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;

...

Artículo 41.

...

I.

...

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.



Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

El derecho de asociación en materia político-electoral, que la *Sala Superior* ha considerado se trata de un **derecho fundamental**, consagrado en el artículo 35, fracción III, de la *Constitución*, propicia el pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno.

En efecto, la libertad de asociación, que subyace en ese derecho, constituye una condición fundamental de todo Estado constitucional democrático de derecho, pues sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales que lo tutelen, no sólo se impediría la formación de partidos y agrupaciones políticas de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Federal, quedaría socavado; por lo tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral es la base de la formación de los partidos políticos y asociaciones políticas.

De esta forma, todo ciudadano mexicano tiene derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; específicamente, es potestad de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos o afiliarse libre e individualmente a ellos, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III; 41, fracción I, párrafo segundo, *in fine*, y IV; y 99, fracción V, de la *Constitución*.

El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 9o. constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito, mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33 de la *Constitución*.

Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a través de los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen legalmente para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

En este tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, *in fine*, de la *Constitución*, es un derecho fundamental



**Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL**

**CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018**

con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas; y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios.

Cabe señalar, además, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 24/2002 emitida por la *Sala Superior*, de rubro **DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES**.

Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, cuando se estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de ciudadanos, tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que únicamente los ciudadanos pueden afiliarse a los institutos políticos, libre e individualmente.

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos correspondiente,⁵⁸ tuvo como propósito proteger el derecho constitucional de los mexicanos a la libre

⁵⁸ Consultable en la página https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/procLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf



Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

afiliación a partidos y asociaciones políticas, garantizando que se ejerza en un ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada ciudadano, complementando el artículo 35, fracción III constitucional, que ya preveía, desde mil novecientos noventa —reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de abril del citado año—, como un derecho público subjetivo de los ciudadanos, asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; disposición que ha permanecido incólume desde entonces en el texto de la Ley Fundamental.

El derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y afiliación —para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos políticos electorales, se encuentran consagrados a nivel internacional en diversos instrumentos suscritos por nuestro país, tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, reconoció en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; y que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mismo que estableció en su artículo 22, que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

En congruencia con lo anterior, la Organización de Estados Americanos suscribió en San José de Costa Rica —de ahí que se conozca también con el nombre de Pacto de San José—, en noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece en su artículo 16, en lo que al tema interesa, que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.



**Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL**

**CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018**

Esto es, la tradición jurídica internacional reconoce el derecho fundamental de asociarse libremente y a no ser obligado a formar parte de una colectividad, hace más de siete décadas; y el de formar grupos organizados y permanentes — asociarse— para tomar parte en los asuntos políticos de su nación, hace más de cinco.

No obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se incorporó al texto fundamental en la década de los noventa del siglo pasado, la legislación secundaria, como sucede con la regulación internacional, tiene una larga tradición en la protección de la voluntad libre de los ciudadanos para ser parte de un partido político.

En efecto, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el cinco de enero de mil novecientos setenta y tres, hace ya cuarenta y cinco años, estableció en su artículo 23, fracción II, numeral 1, incisos a) y b), un mecanismo de certeza encaminado a dar cuenta de que los ciudadanos afiliados a una agrupación política, como precursor de un partido político, habían consentido ser incorporados al respectivo padrón de militantes, como se advierte enseguida:

Artículo 23. Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar posteriormente su registro como Partido Político Nacional, en términos del artículo 24 de esta ley, es necesario que satisfaga los siguientes requisitos:

I...

II. Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de las entidades de la República, una asamblea en presencia de un juez, notario público o funcionario que haga sus veces quien certificará:

1. Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad respectiva, clasificadas por municipios o delegaciones, las que deberán contener:

a. En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto exprese que las personas listadas han quedado plenamente enteradas de la declaración de principios, programa de acción y Estatutos, y que suscriben el documento como manifestación formal de afiliación, y

b. El nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de credencial permanente de elector y firma de cada afiliado o huella digital en caso de no saber escribir.



**Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL**

**CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018**

En términos semejantes, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales promulgada el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y siete, estableció en su artículo 27, fracción III, inciso a), que, entre otros requisitos a cubrir para que una organización pudiese constituirse como partido político, debía celebrar un determinado número de asambleas distritales o estatales, en las que un Juez Municipal, de Primera Instancia o de Distrito; notario público o funcionario acreditado por la entonces Comisión Federal Electoral, certificara que los afiliados que asistieron, aprobaron los documentos básicos respectivos y suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, mismo que también contemplaba en su artículo 34, fracción II, que era un requisito para constituirse como Partido Político Nacional, haber celebrado el número de asambleas en cada una de las entidades federativas o Distritos Electorales previsto en dicha norma, en las cuales un notario o servidor público autorizado, certificara que los afiliados, además de haber aprobado la declaración de principios, programa de acción y los Estatutos, suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

En esta línea de tiempo, es pertinente destacar el *COFIPE* de mil novecientos noventa.

Dicha norma, para el caso que nos ocupa, guarda una importancia singular, puesto que en ella, por primera vez, se previó, de manera expresa, lo siguiente:

- Que es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir Partidos Políticos Nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y libremente, en su artículo 5, párrafo 1;
- Que los Estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras cuestiones, los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, en su artículo 27, párrafo 1, inciso b);



**Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL**

**CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018**

- Que era obligación de los Partidos Políticos Nacionales, cumplir sus normas de afiliación, ello en el artículo 38, párrafo 1, inciso e); y
- Que los partidos y agrupaciones políticas, podían ser sancionados con amonestación pública, multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo, reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les correspondiera, la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento, la suspensión de su registro como partido o agrupación política, e incluso con la cancelación de su registro, entre otros supuestos, cuando incumplieran con las obligaciones señaladas en el artículo 38 antes mencionado.

Por otro lado, conviene dejar establecido que este mismo *Código*, en su artículo 38, párrafo 1, inciso c), establecía, como lo hace ahora la *LGIPE*, que es obligación de los Partidos Políticos Nacionales mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o Distritos Electorales, requeridos para su constitución y registro.

B) Lineamientos para la verificación de afiliados

En congruencia con lo anterior, para llevar a cabo la verificación del padrón de afiliados de los partidos políticos, la autoridad electoral nacional, el trece de septiembre de dos mil doce, emitió el Acuerdo del *Consejo General* del *IFE* por el que, en acatamiento a la sentencia emitida por la *H. Sala Superior* en el expediente **SUP-RAP-570/2011**, se aprueban los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro (**CG617/2012**).

De ahí que la *DERFE* y la *DEPPP*, en el año de dos mil catorce, iniciaron un procedimiento de verificación de los padrones de afiliados de los Partidos Políticos Nacionales, con la finalidad de comprobar si los mismos contaban con el mínimo de adeptos en las entidades federativas o Distritos Electorales requeridos para su constitución y registro.



**Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL**

**CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018**

Así, de las disposiciones contenidas en los Lineamientos mencionados, se obtienen las siguientes conclusiones respecto al procedimiento para la verificación del padrón de los Partidos Políticos Nacionales:

- La *DEPPP* (en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y la *DERFE*), desarrollará un sistema de cómputo, en el cual los Partidos Políticos Nacionales deben realizar la captura de los datos mínimos y actuales de todos sus afiliados.
- La *DEPPP*, informará mediante oficio a la *DERFE* que el padrón de afiliados del partido político que corresponda, se encuentra en condiciones de ser verificado.
- La *DERFE*, procederá a realizar la verificación conforme a sus Lineamientos, obteniendo un Total preliminar de afiliados, el cual deberá entregar a la *DEPPP*.
- Recibidos los resultados de la verificación por parte de la *DEPPP*, deberá remitir a los partidos políticos, las listas en las que se señalen los datos de los afiliados que se encuentren duplicados en dos o más partidos, para que manifiesten lo que a su derecho convenga.
- Recibida la respuesta de los partidos políticos, la *DEPPP* (en coordinación con la *DERFE*), analizará cuáles registros pueden sumarse al Total preliminar de afiliados, para obtener el número Total de afiliados del partido; asimismo, deberán señalar que en aquellos casos en los que se encuentren afiliados a su vez a algún otro partido político con registro, para que puedan ser sumados al Total de afiliados del partido, éste deberá presentar escrito con firma autógrafa del ciudadano, en el que manifieste su deseo de continuar afiliado al partido político que corresponda y renuncia a cualquier otro.
- En caso de que más de un partido político presentara el documento a que se refiere el párrafo que antecede, la *DEPPP*, con el apoyo de las Juntas Locales y Distritales del Instituto, solicitará por oficio al ciudadano en



Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

cuestión, que decida cuál es el partido al que desea continuar afiliado, apercibido de que en caso de no hacerlo, se eliminará del padrón de afiliados de los partidos en los que se encontró registrado.

En torno a ello, es preciso no perder de vista que el propósito central de los Lineamientos analizados consistió en regular el procedimiento para determinar si los partidos políticos con registro nacional cuentan o no con el mínimo de afiliados exigido por la ley para la conservación de su registro, pero en modo alguno constituyen la fuente de la obligación de los partidos políticos para cumplir la normatividad general y la interna de cada uno de ellos, ni mucho menos para respetar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos, pues, como se señaló, tal derecho emana de la Constitución, de los instrumentos internacionales y de la ley.

Esto es, los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, únicamente constituye el instrumento normativo al que se deberán apegar tanto los partidos políticos como las diversas instancias del *INE* involucradas en la verificación del requisito legal para la conservación del registro de los Partidos Políticos Nacionales, que describe las etapas a que se sujetará el procedimiento de verificación y las áreas de responsabilidad de cada uno de los sujetos que intervienen, pero en modo alguno significa que la obligación de los partidos políticos de respetar el derecho de libre afiliación a sus filas encuentre sustento en dicho instrumento, ni mucho menos que dicha obligación haya nacido a la par de los Lineamientos mencionados.

Al respecto, si bien tal ordenamiento contiene distintas previsiones en lo referente a la afiliación de las ciudadanas y los ciudadanos, la responsabilidad de respetar de manera irrestricta la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, proviene directamente de la *Constitución*, instrumentos internacionales y del *COFIPE*, cuyas disposiciones son previas a la emisión de dichos Lineamientos y de un rango superior, por lo que resultaría impreciso afirmar que previo a la emisión de la norma reglamentaria, los partidos políticos no tenían la carga de obtener y conservar la documentación idónea para poner en evidencia que la afiliación de un determinado ciudadano estuvo precedida de su libre voluntad, como se desarrollará más adelante.



Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

Así, la operación del procedimiento de verificación puede poner al descubierto la afiliación a uno o varios partidos políticos de un ciudadano determinado, quien, de estimarlo pertinente, podrá cuestionar la o las afiliaciones que considere fueron ilegítimas, correspondiendo al partido en cuestión demostrar que, previo a la incorporación del individuo a sus filas, acató las disposiciones de la Constitución y la Ley, mediante los documentos donde conste la libre voluntad del ciudadano de ser afiliado al partido político que lo reportó como militante para demostrar que cuenta con los necesarios para conservar su registro.

De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el derecho de libre afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país, ha seguido una tendencia encaminada a garantizar, cada vez de mejor manera, que los ciudadanos gocen de libertad absoluta para decidir su ideario político y, en congruencia con él, determinar si desean o no afiliarse a un partido político y a cual, así como abandonarlo o permanecer al margen de todos, pues la regulación respectiva ha transitado desde la publicación de listas de afiliados, a fin de asegurar que los ciudadanos conozcan su situación respecto de un instituto político en particular, hasta la obligación de éstos de comprobar fehacientemente, a través de documentos idóneos y específicos, que la incorporación de una persona al padrón de militantes de un instituto político fue solicitada por el ciudadano, como expresión de su deseo libre de participar activamente, por ese canal, en la vida pública de la nación.

C) Normativa interna del *PAN*

A efecto de tener claridad acerca del proceso que un ciudadano debe llevar a cabo para convertirse en militante del partido político ahora denunciado, se hace necesario analizar la norma interna del partido político, para lo cual, enseguida se transcribe la parte conducente de los Estatutos del *PAN* consiste precisamente en el incumplimiento de sus propias normas de afiliación.⁵⁹

⁵⁹ Consultable en la página de internet del *PAN*, o bien en la dirección electrónica <http://actores-politicos.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos/nacionales/documentos-basicos/#!/pan>



Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

Estatuto del PAN

Artículo 8

1. Son militantes del Partido Acción Nacional, los ciudadanos mexicanos que de forma directa, personal, presencial, **individual, libre, pacífica y voluntaria, manifiesten su deseo de afiliarse**, asuman como propios los principios, fines, objetivos y documentos básicos del Partido Acción Nacional, y sean aceptados con tal carácter.

...

Artículo 9

1. El procedimiento de afiliación se regirá conforme a lo previsto en el Reglamento correspondiente. La solicitud se presentará por escrito y podrá realizarse ante cualquier Comité del Partido de la entidad federativa correspondiente, independientemente donde se encuentre su domicilio. Los mexicanos residentes en el extranjero, se podrán afiliar fuera del territorio nacional.

2. En los casos en que se niegue el registro en la entidad, podrán realizar el procedimiento de afiliación, en el Registro Nacional de Militantes.

Artículo 10

1. Para ser militante, se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Ser ciudadano mexicano;**
- b) Tener un modo honesto de vivir;**
- c) Haber participado en la capacitación coordinada o avalada por el área correspondiente del Comité Ejecutivo Nacional;**
- d) Suscribir el formato aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional, acompañando copia de su credencial para votar con fotografía vigente, emitida por el Instituto Nacional Electoral; en el caso de mexicanos que residan en el extranjero, podrán acompañar copia de la matrícula consular.**
En el formato se expresa la obligación de cumplir y respetar los principios de doctrina y documentos básicos de Acción Nacional y su compromiso de participar en forma activa y permanente en la realización de los fines, objetivos y actividades del Partido;
- e) No estar afiliado a otro partido político ya sea nacional o local.**

2. En caso de haber sido militante de otro partido político, deberá separarse de manera definitiva de dicho instituto político, por lo menos seis meses antes de solicitar su afiliación como militante.

3. La militancia en el Partido inicia a partir de la aceptación por el Registro Nacional de Militantes, quien verificará el cumplimiento de los requisitos antes mencionados. En caso de ser aceptado, la fecha de inicio de la militancia será a partir de la recepción de la solicitud de afiliación.



**Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL**

**CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018**

4. El militante se dará como aceptado, si en el plazo de sesenta días naturales, contados a partir de la entrega de la solicitud, no se emite pronunciamiento alguno por parte del Registro Nacional de Militantes.

Artículo 11

1. Son derechos de los militantes:

- a) Que los órganos del Partido establezcan y promuevan actividades que les deberán ser informadas de manera oportuna;*
- b) Votar y elegir de forma directa a los Presidentes de los Comités Directivos Municipales, Comités Directivos Estatales y Comité Ejecutivo Nacional y sus comités;*
- c) Votar y participar en las elecciones y decisiones del Partido, por sí o por delegados;*
- d) Participar en el gobierno del Partido desempeñando cargos en sus órganos directivos, que no podrán ser más de tres por elección en un mismo momento;*
- e) Ser aspirantes, precandidatos y, en su caso, candidatos de Acción Nacional a cargos de elección popular;*
- f) Acceder a la formación y capacitación necesaria y continua, para el cumplimiento de sus deberes como militante del Partido;*
- g) Acceder a mecanismos internos de solución de controversias, cuando sean privados de sus derechos al interior del partido, en términos estatutarios y legales;*
- h) Acceder a la información generada por sus órganos de manera permanente en los términos que señale el reglamento aplicable;*
- i) Solicitar la rendición de cuentas a sus dirigentes, a través de los informes que, con base en la normatividad, se encuentren obligados a presentar durante su gestión, en términos de lo precisado por los Reglamentos;*
- j) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido, mediante los mecanismos establecidos en los Reglamentos;*
- k) Interponer ante el Tribunal Federal o los tribunales electorales locales los medios de defensa previstos por la ley, en contra de las resoluciones y decisiones de los órganos internos del Partido que afecten sus derechos político-electorales, siempre y cuando se haya agotado la instancia intrapartidista;*
- l) Refrendar o renunciar a su condición de militante, en los términos establecidos en estos Estatutos y Reglamentos correspondientes; y*
- m) Los demás que establezcan el artículo 40 de la Ley General de Partidos Políticos y demás ordenamientos legales y del Partido.*

2. Para el ejercicio de sus derechos, los militantes deberán cumplir con sus obligaciones y los requisitos establecidos en los presentes Estatutos, así como en los Reglamentos y en su caso con la normatividad electoral, según corresponda.

3. Para el ejercicio de los incisos b, c y d del presente artículo, deberán transcurrir 12 meses después de ser aceptados como militantes, con las excepciones establecidas en el reglamento.



Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

De lo transcrito se obtiene medularmente lo siguiente:

- Para militar en el *PAN*, los ciudadanos mexicanos deben realizar una manifestación directa, personal, **presencial**, individual, libre, pacífica y voluntaria.
- Uno de los requisitos formales para acceder a la militancia del partido político ahora denunciado, consiste en *Suscribir el formato aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional*, el cual deberá ser *acompañando copia de su credencial para votar con fotografía vigente, emitida por el Instituto Nacional Electoral*.

D) Protección de datos personales

De los artículos 6º, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende el derecho de toda persona, a que en nuestro país se proteja su información privada y sus datos personales, y de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no autorizada de su información personal.

3. CARGA Y ESTANDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO

De conformidad con lo expuesto en el punto inmediato anterior, es válido concluir que cuando un ciudadano pretenda, libre y voluntariamente, ser registrado como militante del *PAN*, por regla general debe acudir a las instancias partidistas competentes, suscribir una solicitud de afiliación y proporcionar la información necesaria para su afiliación, a fin de ser registrado en el padrón respectivo.

En consecuencia, por regla general, los partidos políticos (en el caso en particular el *PAN*), tienen la carga de conservar y resguardar, con el debido cuidado, los elementos o la documentación en la cual conste que el ciudadano en cuestión acudió a solicitar su afiliación y que la misma fue libre y voluntaria, puesto que —se insiste— le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de



Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios.

Esta conclusión es armónica con la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para su constitución y registro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso c), del *COFIPE*, precepto que, derivado de la reforma constitucional en materia política electoral de diez de febrero de dos mil catorce, se reproduce en el diverso 25, párrafo 1, inciso c), de la *LGPP*.

En suma, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están compelidos a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar los elementos o documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en materia de constitución y registro partidario.

Por tanto, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y voluntario para formar parte de su padrón, a través de los documentos y constancias respectivas que son los medios de prueba idóneos para ese fin, y que los titulares de los datos personales le proporcionaron los mismos para esa finalidad, incluso tratándose de aquellas afiliaciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de cualquier instrumento administrativo, emitido con el objeto de verificar la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para conservar su registro, porque, se insiste:

- El derecho humano de libre afiliación política está previsto y reconocido en la Constitución, tratados internacionales y leyes secundarias, desde décadas atrás y tienen un rango superior a cualquier instrumento administrativo.



Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

- Los partidos políticos sirven de espacio para el ejercicio de este derecho fundamental y, consecuentemente, a éstos corresponde demostrar que las personas que lo integran fue producto de una decisión individual, libre y voluntaria.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La emisión y operación de Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales tiene como objeto principal revisar el mantenimiento de un número mínimo de afiliados que exige la ley, pero no es un instrumento del que nazca la obligación de los partidos políticos de garantizar la libre afiliación, ni mucho menos para marcar el tiempo a partir del cual los institutos políticos deben conservar los elementos para demostrar lo anterior.

Esta conclusión es acorde con lo sostenido por la Sala Superior, al resolver el expediente **SUP-RAP-107/2017**,⁶⁰ donde estableció que la presunción de inocencia es un principio que debe observarse en los procedimientos sancionadores, conforme a su Jurisprudencia 21/2013, de rubro: **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES**,⁶¹ el cual tiene distintas vertientes, entre las que destacan, por su

⁶⁰ http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

⁶¹ Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60



Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

trascendencia para el caso que nos ocupa, como regla probatoria⁶² y como estándar probatorio⁶³.

En el primer aspecto —**regla probatoria**— implica destacadamente quién debe aportar los medios de prueba en un procedimiento de carácter sancionador, esto es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción y a la valoración de pruebas.

En el segundo matiz —**estándar probatorio**— es un criterio para concluir cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se traduce en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para considerarse suficiente para condenar.

Al respecto, la sentencia en análisis refiere que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación⁶⁴ ha estimado que es posible derrotar la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia alegada por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los indicios que puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.

Mutatis mutandis, en la materia sancionadora electoral, la Sala Superior consideró en la sentencia referida, que para superar la presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las probanzas integradas en el expediente a fin de corroborar que:

⁶² Jurisprudencia: “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro 2006093.

⁶³ Véase la jurisprudencia de rubro: “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476, número de registro 2006091. ²² Véase la nota 35.

⁶⁴ Véanse las tesis **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA**, así como **DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO**.



Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

- La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciantes sea capaz de explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera coherente.
- Se refuten las demás hipótesis admisibles de inocencia del acusado.

Así, cuando la acusación del quejoso versa sobre la afiliación indebida a un partido político, por no haber mediado el consentimiento del ciudadano, la acusación implica dos elementos:

- Que existió una afiliación al partido.
- Que no medió la voluntad del ciudadano en el proceso de afiliación.

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que “el que afirma está obligado a probar” misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley sustantiva electoral, se obtiene de la aplicación supletoria del artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con fundamento en el diverso 441 de la *LGIFE*, lo que implica, que el denunciante tiene en principio la carga de justificar que fue afiliado al partido que denuncia.

Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera idónea demuestra que una persona está **afiliada voluntariamente** a un partido es la constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta de que un ciudadano desea pertenecer a un instituto político determinado.

Así, cuando en las quejas que dieron lugar al procedimiento sancionador ordinario, una persona alega que **no dio su consentimiento** para pertenecer a un partido, sostiene también que no existe la constancia de afiliación atinente, de manera que la parte denunciante no está obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la prueba, no son objeto de demostración los hechos negativos, sino que conducen a que quien afirme que la incorporación al padrón de militantes estuvo precedida de la manifestación de voluntad del ciudadano, demuestre su dicho.



Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

Esto es, la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de presentar los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus afirmaciones y, consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino que lo constriñe a demostrar que la solicitud de ingreso al partido **fue voluntaria**, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad.

De esta forma, la Sala Superior sostuvo que si el partido denunciado alega que la afiliación se llevó a cabo previo consentimiento del denunciante, será ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no tiene el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes, pues, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que de manera insuperable el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En efecto, aunque el partido no tuviera el mencionado deber, sí podía contar con la prueba de la afiliación de una persona, teniendo en cuenta que es un documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, además de que resulta viable probar la afiliación conforme al marco convencional, constitucional y legal concerniente a la libertad de afiliación a través de otros medios de prueba que justifiquen la participación voluntaria de una persona en la vida interna del partido con carácter de militante, como por ejemplo, documentales sobre el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas o el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras.

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que dice se llevó a cabo, o que deliberada (o incluso accidentalmente) la haya desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.



Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad de conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

4. HECHOS ACREDITADOS Y PRECISIONES

Como se ha mencionado, las denuncias presentadas por los hoy quejosos, versan, en algunos casos, sobre la supuesta violación a su derecho fundamental de libertad de afiliación política, al haber sido incorporados al padrón del *PAN*, sin su consentimiento y, como conducta infractora inherente a ella, la utilización de sus datos personales para sustentar tal afiliación.

En otro caso, uno de los quejosos denuncia que el partido lo mantiene o mantuvo registrado como su militante en contra de su voluntad, no obstante que, previamente, le había manifestado por escrito, su intención de no pertenecer más en sus filas de agremiados.

En torno a la demostración de los hechos constitutivos de las infracciones objeto de las denuncias, en los siguientes cuadros se resumirá, por cada uno de los ciudadanos denunciante, la información derivada de la investigación preliminar implementada, así como las conclusiones que, en cada caso, fueron advertidas, de conformidad con lo siguiente:



Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

No	Ciudadana	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
1	Linda Guadalupe Navarrete López	13/febrero/2018 ⁶⁵	Informó que la quejosa se encontraba afiliada al PAN desde el 13 de enero de 2014.	<p>Afiliada</p> <p>Mediante oficio RPA2-0102/2018 de 14 de marzo de 2018,⁶⁶ el ente político reconoció que la quejosa se encontraba registrada como militante del partido desde el 13 de enero de 2014, <u>causando baja del padrón</u> el 15 de noviembre de 2017, debido a la aplicación del Programa Específico de revisión, verificación, actualización, depuración y registro de huellas digitales en el estado de Sinaloa, implementado por el Registro Nacional de Militantes en coordinación con la Comisión Especial de Estrategia para la Transparencia y Reingeniería del Padrón de Militantes del PAN. Para lo cual anexa copia simple del referido acuerdo.</p> <p>No aportó documento alguno que acredite la afiliación, argumentando que en 2017 procedió a la destrucción del "archivo muerto", por lo que se encuentra materialmente imposibilitado para remitir dicho formato.</p>
<p>Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que la denunciante es militante del PAN, que la citada ciudadana negó haberse afiliado a ese instituto político y que éste no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, ya que el hecho manifestado por dicho instituto político, de llevar a cabo la destrucción de "archivo muerto" en el año 2017, no constituye una excluyente de responsabilidad para el PAN, la conclusión debe ser que Sí se trata de una afiliación indebida.</p>				

⁶⁵ Visible a foja 09 del expediente.

⁶⁶ Visible a fojas 164 a 230 del expediente.



Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

No	Ciudadana	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
2	Mónica Ramírez Fortis	14/febrero/2018 ⁶⁷	Informó que la quejosa se encuentra afiliada al PAN desde el 28 de enero de 2014.	<p>Afiliada</p> <p>Mediante oficio RPAN2-0102/2018 de 14 de marzo de 2018⁶⁸, el ente político reconoció que la quejosa se encuentra registrada como militante del partido desde el 28 de enero de 2014, con trámite de actualización de datos el 20 de febrero de 2017.</p> <p>Asimismo, en el oficio RPAN2-0281/2018 de 22 de mayo de 2018, ⁶⁹ anexó copia certificada de las constancias de trámite de actualización de datos de dicha ciudadana, consistentes en un documento que contiene la leyenda "Actualización de militantes 2017", donde se aprecia el nombre de la quejosa y una firma, y copia de la credencial para votar a nombre de la denunciante.</p>
<p>Conclusiones</p> <p>Como se evidencia, la <i>DEPPP</i> y el <i>PAN</i> coinciden en que la fecha de afiliación del denunciante al partido político denunciado fue el veintiocho de enero de dos mil catorce.</p> <p>Lo anterior resulta relevante, pues el <i>PAN</i> pretende demostrar la supuesta libre afiliación de la denunciante a partir de una constancia de la que si bien se puede inferir manifestación de la voluntad de Mónica Ramírez Fortis de pertenecer a dicho partido, lo cierto es que, dicha constancia, al haber sido suscrita el veinte de febrero de dos mil diecisiete, resulta insuficiente para acreditar que la militancia de la quejosa se realizó de manera voluntaria.</p> <p>Es decir, la manifestación de Mónica Ramírez Fortis- supuestamente otorgada el veinte de febrero de dos mil diecisiete- en modo alguno puede considerarse como base para presumir que la afiliación de dos mil catorce- que fue desconocida por la quejosa en su escrito inicial de queja- haya sido voluntaria.</p> <p>Adicionalmente, el <i>PAN</i> manifestó que carecía del formato de afiliación de dicha ciudadana, ya que llevó a cabo la destrucción de "archivo muerto" en el año 2017, sin embargo, ello no constituye una excluyente de responsabilidad para el PAN.</p> <p>Por tanto, la conclusión debe ser que Si se trata de una afiliación indebida.</p>				

⁶⁷ Visible a página 19 del expediente.

⁶⁸ Visible a fojas 164 a 230 del expediente.

⁶⁹ Visible a fojas 383 a 396 del expediente.



**Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL**

**CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018**

No	Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
3	José Adolfo San Román Santiago	19/febrero/2018 ⁷⁰	Informó que el quejoso se encontraba afiliado al PAN desde el 24 de febrero de 2016.	<p>Afiliado</p> <p>Mediante oficio RPA2-0102/2018 de 14 de marzo de 2018,⁷¹ el ente político reconoció que el quejoso se encontraba registrado como militante del partido desde el 24 de febrero de 2016, <u>causando baja del padrón el 15 de noviembre de 2017</u>, debido a la aplicación del Programa Específico de revisión, verificación, actualización, depuración y registro de huellas digitales en el estado de Hidalgo, implementado por el Registro Nacional de Militantes en coordinación con la Comisión Especial de Estrategia para la Transparencia y Reingeniería del Padrón de Militantes del PAN. Para lo cual anexa copia simple del referido acuerdo.</p> <p>No aportó documento alguno que acredite la afiliación, argumentando que en 2017 procedió a la destrucción del "archivo muerto", por lo que se encuentra materialmente imposibilitado para remitir dicho formato.</p>
<p>Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del PAN, que el citado ciudadano negó haberse afiliado a ese instituto político y que éste no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, ya que el hecho manifestado por dicho instituto político, de llevar a cabo la destrucción de "archivo muerto" en el año 2017, no constituye una excluyente de responsabilidad para el PAN, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
4	Francisco Javier Ruiz Cruz	04/febrero/2018 ⁷²	Informó que el quejoso se encuentra	Afiliado

⁷⁰ Visible a página 33 del expediente.

⁷¹ Visible a páginas 164 a 230 del expediente.

⁷² Visible a página 41 del expediente



Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

No	Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
			afiliado al PAN desde el 04 de febrero de 2014.	Mediante oficio RPA2-0102/2018 de 14 de marzo de 2018 ⁷³ , el ente político reconoció que el quejoso se encuentra registrado como militante del partido desde el 04 de febrero de 2014, con trámite de actualización de datos el 26 de enero de 2017. Asimismo, en el oficio RPA2-0281/2018 de 22 de mayo de 2018, ⁷⁴ anexó copia certificada de las constancias de trámite de actualización de datos de dicho ciudadano, consistentes en un documento que contiene la leyenda "Actualización de militantes 2017", donde se aprecia el nombre del quejoso y una firma, y copia de la credencial para votar a nombre del denunciante.

Conclusiones

Como se evidencia, la DEPPP y el PAN coinciden en que la fecha de afiliación del denunciante al partido político denunciado fue el cuatro de febrero de dos mil catorce.

Lo anterior resulta relevante, pues el PAN pretende demostrar la supuesta libre afiliación del denunciante a partir de una constancia de la que si bien se puede inferir manifestación de la voluntad de Francisco Javier Ruiz Cruz de pertenecer a dicho partido, lo cierto es que, dicha constancia, al haber sido suscrita el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, resulta insuficiente para acreditar que la militancia del quejoso se realizó de manera voluntaria.

Es decir, la manifestación de Francisco Javier Ruiz Cruz supuestamente otorgada el veintiséis de enero de dos mil diecisiete en modo alguno puede considerarse como base para presumir que la afiliación de dos mil catorce –que fue desconocida por el quejoso en su escrito inicial de queja– haya sido voluntaria.

Adicionalmente el PAN manifestó que carecía del formato de afiliación de dicho ciudadano, ya que llevó a cabo la destrucción de "archivo muerto" en el año 2017, sin embargo, ello no constituye una excluyente de responsabilidad para el PAN.

Por tanto, la conclusión debe ser que **Sí se trata de una afiliación indebida.**

⁷³ Visible a fojas 164 a 230 del expediente.

⁷⁴ Visible a fojas 383 a 396 del expediente.



**Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL**

**CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018**

No	Ciudadana	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
5	Ingrid Yamilet Santos Navarrete	20febrero/2018 ⁷⁵	Informó que la quejosa se encuentra afiliada al PAN desde el 03 de abril de 2014.	<p>Afiliado</p> <p>Mediante oficio RPA2-0102/2018 de 14 de marzo de 2018⁷⁶, el ente político reconoció que la quejosa se encuentra registrada como militante del partido desde el 03 de abril de 2014, con trámite de actualización de datos el 13 de julio de 2017.</p> <p>Asimismo, en el oficio RPA2-0281/2018 de 22 de mayo de 2018, ⁷⁷ anexó copia certificada de las constancias de trámite de actualización de datos de dicha ciudadana, consistentes en un documento que contiene la leyenda "Actualización de militantes 2017", donde se aprecia el nombre de la quejosa y una firma, y copia de la credencial para votar a nombre de la denunciante.</p>
<p>Conclusiones</p> <p>Como se evidencia, la DEPPP y el PAN coinciden en que la fecha de afiliación de la denunciante al partido político denunciado fue el tres de abril de dos mil catorce.</p> <p>Lo anterior resulta relevante, pues el PAN pretende demostrar la supuesta libre afiliación de la denunciante a partir de una constancia de la que si bien se puede inferir manifestación de la voluntad de Ingrid Yamilet Santos Navarrete de pertenecer a dicho partido, lo cierto es que, dicha constancia, al haber sido suscrita el trece de julio de dos mil diecisiete, resulta insuficiente para acreditar que la militancia de la quejosa se realizó de manera voluntaria.</p> <p>Es decir, la manifestación de Ingrid Yamilet Santos Navarrete supuestamente otorgada el trece de julio de dos mil diecisiete- en modo alguno puede considerarse como base para presumir que la afiliación de dos mil catorce –que fue desconocida por la quejosa en su escrito inicial de queja- haya sido voluntaria.</p>				

⁷⁵ Visible a página 46 del expediente.

⁷⁶ Visible a fojas 164 a 230 del expediente.

⁷⁷ Visible a fojas 383 a 396 del expediente.



**Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL**

**CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018**

No	Ciudadana	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
Adicionalmente el PAN manifestó que carecía del formato de afiliación de dicha ciudadana, ya que llevó a cabo la destrucción de "archivo muerto" en el año 2017, sin embargo, ello no constituye una excluyente de responsabilidad para el PAN.				
Por tanto, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida.				

No	Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
6	Andrés López Lujan	20/febrero/2018 ⁷⁸	Informó que el quejoso se encontraba afiliado al PAN desde el 03 de abril de 2017.	<p>Afiliado</p> <p>Mediante oficio RPAN2-0102/2018 de 14 de marzo de 2018,⁷⁹ el ente político reconoció que el quejoso se encontraba registrado como militante del partido desde el 03 de abril de 2017, causando baja del padrón el 15 de noviembre de 2017, debido a la aplicación del Programa Específico de revisión, verificación, actualización, depuración y registro de huellas digitales en el estado de Zacatecas, implementado por el Registro Nacional de Militantes en coordinación con la Comisión Especial de Estrategia para la Transparencia y Reingeniería del Padrón de Militantes del PAN. Para lo cual anexa copia simple del referido acuerdo.</p> <p>No aportó documento alguno que acredite la afiliación, argumentando que en 2017 procedió a la destrucción del "archivo muerto", por lo que se encuentra materialmente imposibilitado para remitir dicho formato.</p>
<p>Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del PAN, que el citado ciudadano</p>				

⁷⁸ Visible a página 55 del expediente

⁷⁹ Visible a fojas 164 a 230 del expediente.



Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

No	Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
negó haberse afiliado a ese instituto político y que éste no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, ya que el hecho manifestado por dicho instituto político, de llevar a cabo la destrucción de "archivo muerto" en el año 2017, no constituye una excluyente de responsabilidad para el PAN, la conclusión debe ser que Sí se trata de una afiliación indebida.				

No	Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
7	Alfredo Andrés Meza Luna	21/febrero/2018 ⁸⁰	Informó que el quejoso se encontraba afiliado al PAN desde el 09 de marzo de 1998.	<p>Afiliado</p> <p>Mediante oficio RPAN2-0102/2018 de 14 de marzo de 2018,⁸¹ el ente político reconoció que el quejoso se encontraba registrado como militante del partido desde el 09 de marzo de 1998, <u>causando baja del padrón</u> el 15 de noviembre de 2017, debido a la aplicación del Programa Específico de revisión, verificación, actualización, depuración y registro de huellas digitales en el estado de Veracruz, implementado por el Registro Nacional de Militantes en coordinación con la Comisión Especial de Estrategia para la Transparencia y Reingeniería del Padrón de Militantes del PAN. Para lo cual anexa copia simple del referido acuerdo.</p> <p>No aportó documento alguno que acredite la afiliación, argumentando que en 2017 procedió a la destrucción del "archivo muerto", por lo que se encuentra materialmente imposibilitado para remitir dicho formato.</p>
<p>Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del PAN, que el citado ciudadano negó haberse afiliado a ese instituto político y que éste no aportó elementos para acreditar que la</p>				

⁸⁰ Visible a páginas 62 a la 63 del expediente.

⁸¹ Visible a fojas 164 a 230 del expediente.



Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

No	Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
afiliación fue voluntaria, ya que el hecho manifestado por dicho instituto político, de llevar a cabo la destrucción de "archivo muerto" en el año 2017, no constituye una excluyente de responsabilidad para el PAN, la conclusión debe ser que Si se trata de una afiliación indebida.				

No	Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
8	Carlos Ocaña Corte	22/febrero/2018 ⁸²	Informó que el quejoso se encuentra afiliado al PAN desde el 30 de octubre de 2006.	<p>Afiliado</p> <p>Mediante oficio RPAN2-0102/2018 de 14 de marzo de 2018⁸³, el ente político reconoció que el quejoso se encuentra registrado como militante del partido desde el 30 de octubre de 2006, con trámite de actualización de datos el 28 de junio de 2017.</p> <p>Asimismo, en escrito de 26 de abril de 2018, ⁸⁴ anexó copia certificada de las constancias de trámite de actualización de datos de dicho ciudadano, consistentes en un documento que contiene la leyenda "Actualización de militantes 2017", donde se aprecia el nombre del quejoso y una firma, y copia de la credencial para votar a nombre del denunciante.</p>

Conclusiones
Como se evidencia, la DEPPP y el PAN coinciden en que la fecha de afiliación del denunciante al partido político denunciado fue el treinta de octubre de dos mil seis.

Lo anterior resulta relevante, pues el PAN pretende demostrar la supuesta libre afiliación del denunciante a partir de una constancia de la que si bien se puede inferir manifestación de la voluntad de Carlos Ocaña Corte de pertenecer a dicho partido, lo cierto es que, dicha constancia, al haber sido suscrita el veintiocho de junio dos mil diecisiete, resulta insuficiente para acreditar que la militancia del quejoso se realizó de manera voluntaria.

Es decir, la manifestación de Carlos Ocaña Corte supuestamente otorgada el veintiocho de junio de dos mil diecisiete en modo alguno puede considerarse como base para presumir que la afiliación de dos mil catorce —que fue desconocida por el quejoso en su escrito inicial de queja— haya sido voluntaria.

⁸² Visible a página 68 del expediente.

⁸³ Visible a fojas 164 a 230 del expediente.

⁸⁴ Visible a fojas 383 a 396 del expediente.



Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

No	Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
Adicionalmente el PAN manifestó que carecía del formato de afiliación de dicho ciudadano, ya que llevó a cabo la destrucción de "archivo muerto" en el año 2017, sin embargo, ello no constituye una excluyente de responsabilidad para el PAN.				
Por tanto, la conclusión debe ser que Si se trata de una afiliación indebida.				

No	Ciudadana	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
9	Tomasa Alarcón Elox	22/febrero/2018 ⁸⁵	Informó que la quejosa se encontraba afiliada al PAN desde el 02 de agosto de 2014.	<p>Afiliada</p> <p>Mediante oficio RPAN2-0102/2018 de 14 de marzo de 2018,⁸⁶ el ente político reconoció que la quejosa se encontraba registrada como militante del partido desde el 02 de agosto de 2014, causando baja del padrón el 15 de noviembre de 2017, debido a la aplicación del Programa Específico de revisión, verificación, actualización, depuración y registro de huellas digitales en el estado de Veracruz, implementado por el Registro Nacional de Militantes en coordinación con la Comisión Especial de Estrategia para la Transparencia y Reingeniería del Padrón de Militantes del PAN. Para lo cual anexa copia simple del referido acuerdo.</p> <p>No aportó documento alguno que acredite la afiliación, argumentando que en 2017 procedió a la destrucción del "archivo muerto", por lo que se encuentra materialmente imposibilitado para remitir dicho formato.</p>

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que la denunciante fue militante del PAN, que la citada ciudadana

⁸⁵ Visible a páginas 76 a 77 del expediente.

⁸⁶ Visible a fojas 164 a 230 del expediente.



**Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL**

**CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018**

No	Ciudadana	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
				negó haberse afiliado a ese instituto político y que éste no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, ya que el hecho manifestado por dicho instituto político, de llevar a cabo la destrucción de "archivo muerto" en el año 2017, no constituye una excluyente de responsabilidad para el PAN, la conclusión debe ser que Sí se trata de una afiliación indebida.

No	Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
10	Luis Fernando Nava Águila	22/febrero/2018 ⁸⁷	Informó que el quejoso se encontraba afiliado al PAN desde el 23 de diciembre de 2013.	<p>Afiliado</p> <p>Mediante oficio RPAN2-0102/2018 de 14 de marzo de 2018,⁸⁸ el ente político reconoció que el quejoso se encontraba registrado como militante del partido desde el 23 de diciembre de 2013, causando baja del padrón el 15 de noviembre de 2017, debido a la aplicación del Programa Específico de revisión, verificación, actualización, depuración y registro de huellas digitales en el estado de Jalisco, implementado por el Registro Nacional de Militantes en coordinación con la Comisión Especial de Estrategia para la Transparencia y Reingeniería del Padrón de Militantes del PAN. Para lo cual anexa copia simple del referido acuerdo.</p> <p>No aportó documento alguno que acredite la afiliación, argumentando que en 2017 procedió a la destrucción del "archivo muerto", por lo que se encuentra materialmente imposibilitado para remitir dicho formato.</p>
<p>Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del PAN, que el citado ciudadano negó haberse afiliado a ese instituto político y que éste no aportó elementos para acreditar que la</p>				

⁸⁷ Visible a página 84 del expediente

⁸⁸ Visible a fojas 164 a 230 del expediente.



Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

No	Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
afiliación fue voluntaria, ya que el hecho manifestado por dicho instituto político, de llevar a cabo la destrucción de "archivo muerto" en el año 2017, no constituye una excluyente de responsabilidad para el PAN, la conclusión debe ser que Si se trata de una afiliación indebida.				

No	Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
11	Emmanuel Alonso López Bernal	26/febrero/2018 ⁸⁹	Informó que el quejoso se encontraba afiliado al PAN desde el 24 de febrero de 2014.	Afiliado Mediante oficio RPAN2-0102/2018 de 14 de marzo de 2018, ⁹⁰ el ente político reconoció que el quejoso se encontraba registrado como militante del partido desde el 24 de febrero de 2014, causando baja del padrón el 15 de noviembre de 2017, por la causal de depuración al no acudir a actualizar sus datos, pero no aportó documento alguno que acredite la afiliación, argumentando que en 2017 procedió a la destrucción del "archivo muerto", por lo que se encuentra materialmente imposibilitado para remitir dicho formato.
Conclusiones A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del PAN, que el citado ciudadano negó haberse afiliado a ese instituto político y que éste no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, ya que el hecho manifestado por dicho instituto político, de llevar a cabo la destrucción de "archivo muerto" en el año 2017, no constituye una excluyente de responsabilidad para el PAN, la conclusión debe ser que Si se trata de una afiliación indebida.				

No	Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
12	Sinaí Navarro Aguilar	16/febrero/2018 ⁹¹	Informó que el quejoso se encontraba afiliado al	Afiliado Mediante oficio RPAN2-0127/2018 de 23 de marzo de 2018, ⁹² el ente

⁸⁹ Visible a páginas 92 a 93 del expediente.

⁹⁰ Visible a fojas 164 a 230 del expediente.

⁹¹ Visible a página 115 del expediente.

⁹² Visible a fojas 164 a 230 del expediente.



Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

No	Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
			PAN desde el 09 de noviembre de 2005.	<p>político reconoció que el quejoso se encontraba registrado como militante del partido desde el 09 de noviembre de 2005, causando baja del padrón el 15 de noviembre de 2017, debido a la aplicación del Programa Específico de revisión, verificación, actualización, depuración y registro de huellas digitales en el estado de Coahuila, implementado por el Registro Nacional de Militantes en coordinación con la Comisión Especial de Estrategia para la Transparencia y Reingeniería del Padrón de Militantes del PAN. Para lo cual anexa copia simple del referido acuerdo.</p> <p>No aportó documento alguno que acredite la afiliación, argumentando que en 2017 procedió a la destrucción del "archivo muerto", por lo que se encuentra materialmente imposibilitado para remitir dicho formato.</p>
<p>Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, no existe controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del PAN, no obstante, dicho ciudadano manifestó "en el año 2013 solicité mi baja y mi renuncia ha dicho Partido Político, realizando los trámites oportunos que señalan sus Estatutos, por lo que derivado de lo anterior solicité me fuera aclarada dicha situación de afiliación, contestando el partido mediante oficio de fecha 18 de enero del presente año que no me encontraba dentro del Padrón de registro nacional como militante", sin embargo, a la fecha de la presentación de la denuncia (16 de febrero de 2018), éste seguía apareciendo en el padrón de militantes del PAN.</p> <p>No obstante lo anterior, Sinai Navarro Aguilar, no aportó documento que probara haber presentado su renuncia en 2013, es de concluirse que no se trató de una falta a la normativa electoral, en su modalidad de no hacerle efectivo su derecho de desafiliación; toda vez que no se aportaron elementos de prueba para demostrarlo.</p>				

Finalmente, debe precisarse que las constancias aportadas por la DEPPP, al ser documentos emitidos por autoridades dentro del ámbito de sus facultades, se consideran pruebas documentales públicas, de conformidad con el artículo 22,



Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

párrafo 1, del *Reglamento de Quejas*, mismas que, conforme a lo previsto en los artículos 462, párrafo 2 de la *LGIPE* y 27, párrafo 2 del Reglamento citado; por tanto, tienen valor probatorio pleno, ya que no se encuentran desvirtuadas respecto de su autenticidad o contenido.

En el mismo tenor, las documentales allegadas al expediente por el partido político denunciado, constituyen documentales privadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 22, numeral 1, fracción II del *Reglamento Quejas*; por lo que, por si mismas, carecen de valor probatorio pleno, y sólo alcanzarán ese grado cuando, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio, generen convicción en este *Consejo General* sobre la veracidad de los hechos a que se refieren, ello al tenor de lo preceptuado en los artículos 462, párrafo 3 de la *LGIPE*, y 27, párrafo 3, del Reglamento en mención.

5. CASO CONCRETO

Previo al análisis detallado de las infracciones aducidas por los quejosos, es preciso subrayar, que de lo previsto en el artículo 355, párrafo 5 del *COFIPE*, cuyo contenido se replica en el artículo 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, es posible advertir los elementos que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en posibilidad de imponer alguna sanción en materia electoral.

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que objetivamente esté demostrada mediante pruebas una situación antijurídica electoral.

Posteriormente, verificar que esta situación sea imputable a algún sujeto de Derecho en específico; esto es, **partido político**, candidato o inclusive cualquier persona física o moral, es decir, la atribuibilidad de la conducta objetiva a un sujeto en particular.

De tal forma que, para la configuración de una infracción administrativa electoral se requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte el hecho ilícito (elemento objetivo) y por otra su imputación o atribución directa o indirecta



Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

(elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o incumplimiento al deber de cuidado.

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad electoral, podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las circunstancias que rodearon la comisión de la conducta.

En tal sentido, por cuanto hace a la existencia del supuesto normativo, debe reiterarse, como se estableció en apartados previos, que desde hace décadas está reconocido en la legislación de este país, la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, y de igual manera, que las personas en este país tienen el derecho de que se proteja su información privada y sus datos personales, todo lo cual está previsto desde el nivel constitucional.

En el caso, si bien en el marco normativo se hace referencia a los *Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro*, identificados con el número de resolución CG617/2012 y, de igual manera se transcribe la parte de disposiciones estatutarias del partido político denunciado, relacionada con el procedimiento de afiliación, lo cierto es que, por el carácter constitucional de tales derechos, la existencia de los mismos —y las obligaciones correlativas a éstos—, no está condicionada al reconocimiento por parte de los sujetos obligados, en este caso, de los partidos políticos.

En otras palabras, si la libertad de afiliación política, en todas sus vertientes, es un derecho de los ciudadanos de este país desde hace varios decenios, resulta por demás evidente que las obligaciones de los partidos políticos que deriven de esta garantía —respetar la libertad de afiliación o, en su caso, la decisión de no pertenecer más a un partido, así como acreditar fehacientemente el consentimiento del ciudadano para cualquier caso— no debe estar sujeta o condicionada a que éstos establezcan en sus normas internas disposiciones encaminadas a su protección, es decir, esta carga que se les impone no depende del momento en el que los partidos políticos hayan incluido en sus normas internas la obligación de que la afiliación sea voluntaria.



Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

Por cuanto hace al elemento subjetivo señalado líneas arriba, debe destacarse que, la autoridad, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su atribución a las personas involucradas en un procedimiento sancionador, debe contar con elementos suficientes que generen convicción para arribar a tal conclusión, y, de ser el caso, determinar responsabilidad y la sanción respectiva.

Para ello, la autoridad, analizará y ponderará el caudal probatorio que obre en el expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos como el conocimiento de un hecho desconocido a partir de uno conocido, o bien, prueba plena para el descubrimiento de la verdad.

En principio, corresponde al promovente demostrar con pruebas suficientes la comisión de la conducta ilícita así como el señalamiento que formula en contra de la parte denunciada (atribuibilidad), es decir, la carga de la prueba corresponde al quejoso.

Lo anterior, es acorde al principio general del Derecho "el que afirma está obligado a probar", recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de aplicación supletoria al presente caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 441 de la *LGIPE*.

En tanto que al que niega se le releva de esa carga, salvo cuando su negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; supuesto en el que estará obligado también a demostrarlo en el procedimiento.

Así, esta autoridad electoral considera, en consonancia con lo resuelto por la Sala Superior, en el expediente SUP-RAP-107/2017, referido previamente, que la carga de la prueba corresponde al partido político que afirma que contaba con el consentimiento del quejoso para afiliarlo a su partido político, y no al ciudadano que negó haber solicitado su inclusión en el padrón de militantes del PAN.

Así, conforme lo establecido en el apartado *ACREDITACIÓN DE HECHOS*, está demostrado a partir de la información proporcionada por la *DEPPP* que los



Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

denunciantes se encontraron, al momento en que se realizó la investigación, como afiliados del *PAN*.

Por otra parte, el *PAN* no demostró con medios de prueba, que la afiliación respectiva sea el resultado de la manifestación de voluntad libre e individual de los ciudadanos, en los cuales, ellos mismos, *motu proprio*, expresaron su consentimiento y por ende, proporcionaron sus datos personales a fin de llevar a cabo la afiliación a dicho instituto político.

Debiendo reiterarse que la carga de la prueba corresponde al *PAN*, en tanto que el dicho de los actores consiste en afirmar que no dieron su consentimiento para ser afiliados, o bien, que no se les separó de la militancia cuando así lo solicitaron, es decir, se trata de un hecho negativo, que en principio no es objeto de prueba; en tanto que los partidos políticos, cuya defensa consiste básicamente en afirmar que sí cumplieron las normas que tutelan el derecho fundamental de afiliación, tienen el deber de probar esa situación.

En tanto que, el partido político denunciado, cuya defensa consiste básicamente en afirmar que sí cumplieron las normas que tutelan el derecho fundamental de afiliación, tienen el deber de probar esa situación.

Sin embargo, tal y como quedó de manifiesto en el apartado del *MARCO NORMATIVO* de la presente Resolución, así como en el correspondiente a *CARGA Y ESTANDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO*, la libertad de afiliación en materia político-electoral, es un derecho reconocido y así garantizado para todo ciudadano de nuestro país, al menos desde hace varias décadas, tanto a nivel constitucional como legal, **el cual es concebido como la potestad que se tiene de afiliarse a un partido político, permanecer afiliado a éste, desafiliarse e, incluso, no pertenecer a ninguno.** Asimismo, es incuestionable que el derecho a la protección de datos personales e información relacionada con la vida privada de las personas, es igualmente un derecho con una trayectoria de protección por demás lejana.

En este sentido, es pertinente dejar en claro que la garantía y protección a los citados derechos, evidentemente no deriva de disposiciones reglamentarias al



Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

interior de los institutos políticos, que prevean como obligación del partido político, la conservación de los expedientes de afiliación de cada miembro, ni tampoco a partir de la emisión de los *Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro*, emitidos por el propio INE en la Resolución CG617/2012, sino que, como se vio, el derecho tutelado deviene de disposiciones de rango supremo, el cual debe ser tutelado en todo momento, y no a partir de normas internas o reglamentarias que así lo establezcan.

En este orden de ideas, se debe concluir que si la libre afiliación a los partidos políticos es un derecho de los ciudadanos previsto como garantía constitucional en nuestro país desde hace décadas, también lo es la obligación de los partidos políticos de preservar, y en su caso, de demostrar, en todo momento, que cualquier acto que engendre la voluntad de un ciudadano para formar parte en las filas de un instituto político, esté amparado en el o los documentos que demuestren indefectiblemente el acto previo del consentimiento, siendo **ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no se tiene o tenía el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes**, o –para el caso de la omisión o negativa de atender solicitudes de desafiliación- demostrar que dieron cauce legal a las solicitudes de desafiliación de manera pronta y oportuna y, que derivado de ello, ya no se encuentran en sus registros de militantes.

Lo anterior, porque, como se mencionó, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que de manera insuperable el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que dice se llevó a cabo, o que deliberada (o incluso accidentalmente) la haya desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la



Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad del conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

En este sentido, toda vez que los denunciantes manifestaron no haber otorgado su consentimiento, que su afiliación se comprobó por la autoridad electoral competente, y que el *PAN* no cumplió con su carga para demostrar que la afiliación sí se solicitó voluntariamente, esta autoridad electoral considera que existe una vulneración al derecho de afiliación de los quejosos y que, intrínsecamente, para la configuración de esa falta, utilizaron sin autorización sus datos personales, lo cual, debe ser considerado por esta autoridad para la imposición de la sanción que, en cada caso, amerite.

Lo anterior encuentra también sustento en lo establecido por la Sala Superior, al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-141/2018, sentencia en la que estableció, en la parte que interesa, lo siguiente:

“...los datos personales de los militantes de los partidos políticos se consideran públicos si son precedidos de la voluntad del ciudadano para afiliarse; por tanto, si es deseo de un ciudadano pertenecer a un partido



Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

político, no puede alegar que existe uso indebido de sus datos personales porque se consideran públicos.

En cambio, si no existe una libre y voluntaria afiliación del ciudadano de pertenecer al partido político, el uso de datos personales al integrar el padrón de militantes es indebido, porque la información ahí contenida deja de ser pública respecto de quienes no tenían ese deseo de afiliarse al partido y, se insiste, aparecer en un padrón al cual no deseaban pertenecer...”

El estudio de fondo del presente asunto se realizará en dos apartados, uno por cuanto hace al ciudadano, que solicitó, de forma voluntaria su desafiliación al partido denunciado y, por otra parte, aquellos que acusan haber sido afiliados indebidamente, al partido político denunciado, es decir, sin mediar su consentimiento previo para ello.

Apartado A. Ciudadano sobre el que no se violó su derecho a la libre afiliación en su vertiente de no permitirle ser desafiliado.

Respecto del ciudadano **Sinai Navarro Aguilar**, el presente procedimiento sancionador ordinario es **INFUNDADO** en contra del *PAN*, por las razones y consideraciones siguientes:

- El ciudadano reconoce su afiliación al *PAN*.
- El ciudadano manifiesta que en el año dos mil trece presentó escrito de renuncia a la militancia al *PAN*; sin embargo, no presentó medio de prueba para acreditar su dicho.

Al respecto, en el caso en concreto, si bien el quejoso se inconforma por la omisión del *PAN* de cancelar su registro como militante en su padrón de afiliados, lo que se traduce en una violación a su derecho a la libre afiliación en su vertiente de no permitirle ser desafiliado, lo cierto es que tal supuesto de infracción no se actualiza en el particular.



Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

Lo anterior, porque de constancias de autos se advierte, por una parte, que el ciudadano **reconoció haberse afiliado voluntariamente** a dicho instituto político, aportando documental en la que hace del conocimiento del Vocal Secretario de la 05 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en Coahuila, que él *“no niega haber ejercido sus derechos fundamentales de participación ciudadana al ser militante de dicha entidad política en años anteriores al 2013”*; asimismo, que su supuesta renuncia al PAN la presentó en el año dos mil trece; sin embargo, no presentó ningún elemento de prueba para acreditar su dicho, tal y como pudiera ser el acuse de recepción del mismo, con lo cual evidenciaría, siquiera de manera indiciaria, la comisión de la conducta omisiva del partido político denunciado.

Al respecto, es importante precisar que, en el procedimiento administrativo sancionador electoral, entre otros principios, corresponde al quejoso aportar un mínimo de material probatorio que permita a la autoridad electoral determinar si existen indicios sobre la comisión de los hechos denunciados.

En el particular, el quejoso manifestó que en el año dos mil trece presentó una supuesta renuncia a su militancia al PAN, sin que ofreciera y/o aportara algún medio de prueba a fin de corroborar su dicho, esto es, a fin de proporcionar a esta autoridad electoral indicios mínimos sobre la comisión de la conducta denunciada, consistente en la omisión del PAN de darlo de baja de su registro de militantes.

Lo anterior, tiene sustento en el contenido de la Tesis de Jurisprudencia **16/2011**, de rubro **PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA.**

Es por ello que, en el particular, se considera que no se actualiza una violación al derecho de libre afiliación, en su modalidad de desafiliación y, en consecuencia, tampoco se advierte. un uso indebido de datos personales del quejoso.

De ahí que el procedimiento, por cuanto hace a este ciudadano, deba declararse **INFUNDADO.**



Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

Apartado B. Ciudadanos que fueron afiliados indebidamente al PAN.

A partir de los razonamientos establecidos en el apartado previo, esta autoridad considera que la afiliación de **los ciudadanos que a continuación se citan**, conforme a las pruebas que obran en autos, en específico la información proporcionada por la *DEPPP*, así como por lo manifestado por el *PAN* y las documentales que éste aportó, no fueron apegadas a derecho.

No.	Quejoso
1	Linda Guadalupe Navarrete López
2	Mónica Ramírez Fortis
3	José Adolfo San Román Santiago
4	Francisco Javier Ruiz Cruz
5	Ingrid Yamilet Santos Navarrete
6	Andrés López Lujan
7	Alfredo Andrés Meza Luna
8	Carlos Ocaña Corte
9	Tomasa Alarcón Elox
10	Luis Fernando Nava Águila
11	Emmanuel Alonso López Bernal

Como se evidenció en el apartado anterior, el *PAN* aceptó que los *quejosos* militaron en esa fuerza política.

El partido político denunciado manifestó en sus escritos de catorce y veintiséis de marzo, veintisiete de junio y diez de julio del año en curso, que se encuentra imposibilitado para aportar las constancias de afiliación de los denunciantes, en razón de que las Comisiones de Vigilancia del Registro Nacional de Miembros y de Afiliación del Consejo Nacional, en sesiones ordinarias del nueve de agosto de dos mil trece y dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, respectivamente, autorizaron al Director del Registro Nacional del Militantes para que realizara la destrucción del archivo muerto del área a su cargo hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis.

Para sustentar su dicho el partido político aporta copia simple del oficio CVRNM/2013/033,⁹³ suscrito por Emma Larios Gaxiola, coordinadora de la

⁹³ Visible en la página 271 del expediente.



**Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL**

**CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018**

Comisión de Vigilancia del Registro Nacional de Miembros a través del cual autoriza al mencionado Director la destrucción del archivo muerto; asimismo, anexa imágenes que documentan la citada destrucción; no obstante, con esos documentos no se acredita que se hayan destruido constancias de afiliación de los quejosos, de ahí que, no sean suficientes para acreditar el dicho del partido político denunciado.

En efecto, como se sostuvo en el subapartado en el que se establecieron consideraciones acerca de la Carga y el Estándar probatorio, el partido político tenía la obligación de resguardar constancias con las que pudiera acreditar que los ciudadanos que han sido afiliados a ese ente político lo han realizado previa manifestación de su deseo de hacerlo.

Por otra parte, el partido político denunciado señaló que los ciudadanos Linda Guadalupe Navarrete López, José Adolfo San Román Santiago, Andrés López Lujan, Alfredo Andrés Mesa Luna, Tomasa Alarcón Elox, Luis Fernando Nava Águila y Emmanuel Alonso López Bernal causaron baja del padrón de militantes del PAN, el quince de noviembre de dos mil diecisiete, en virtud de la aplicación de los Acuerdos por los que se Autoriza el Programa Específico de Revisión, Verificación, Actualización, Depuración y Registro de Datos y Huellas Digitales implementado por el Registro Nacional de Militantes, en diversas entidades federativas, entre ellas Sinaloa, Hidalgo, Zacatecas, Veracruz, Veracruz, Jalisco, Estado de México y, a las cuales corresponden, respectivamente, los citados ciudadanos, no obstante, el PAN se limitó a aportar copia simple de los citados acuerdos de los cuales se advierte el procedimiento para realizar la revisión, verificación, actualización, depuración y registro de datos y huellas digitales, sin embargo, de los mismos no se desprende ningún elemento que los vincule directamente con los quejosos a partir del cual se haga evidente que en acatamiento a esos acuerdos se dio de baja a los siete ciudadanos citados, de ahí que el partido político denunciado carece de elementos para acreditar su dicho en el presente procedimiento. Asimismo, aun cuando en los acuerdos referidos se hubiese precisado el nombre de dichos ciudadanos, el contenido de esos documentos, por sí mismos, únicamente acreditarían –de ser el caso- la baja de los ciudadanos en cuestión como militantes del partido y no que los mismos hayan sido afiliados con su consentimiento, de allí que las documentales exhibidas por el



Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

partido incoado no resulten suficientes para acreditar que en estos casos se trató de afiliaciones indebidas.

Por otra parte, debe sostenerse que, en los casos de los ciudadanos Mónica Ramírez Fortis, Francisco Javier Ruíz Cruz, Ingrid Yamilet Santos Navarrete y Carlos Ocaña Corte, si bien dicho partido aportó un documento en el que supuestamente aparece la manifestación de dichos ciudadanos de mantenerse afiliados a ese instituto político, lo cierto es que, por la fecha de elaboración de esas constancias –**veinte de febrero de dos mil diecisiete, veintiséis de enero de dos mil diecisiete, trece de julio de dos mil diecisiete y veintiocho de junio de dos mil diecisiete, respectivamente**– resultan insuficientes por sí mismas, para acreditar militancias que, según constancias del expediente, datan desde el **veintiocho de enero de catorce, cuatro de febrero de catorce, tres de abril de dos mil catorce y treinta de octubre de dos mil seis**, respectivamente, y que fueron controvertidas por los denunciantes en sus escritos iniciales de queja.

En otras palabras, las afiliaciones indebidas que, respecto de Mónica Ramírez Fortis, Francisco Javier Ruíz Cruz, Ingrid Yamilet Santos Navarrete y Carlos Ocaña Corte se atribuyen a *PAN*, corresponden al año dos mil catorce y dos mil seis, por lo que los documentos en los que se asienta que los quejosos actualizaron sus datos como militantes de ese partido político, y que corresponden al año dos mil diecisiete, en modo alguno desvirtúan la imputación.

Atento a lo anterior, debe precisarse que las constancias aportadas por la *DEPPP*, al ser documentos emitidos por autoridades dentro del ámbito de sus facultades, se consideran pruebas documentales públicas, de conformidad con el artículo 22, párrafo 1, del *Reglamento de Quejas*, mismas que, conforme a lo previsto en los artículos 462, párrafo 2 de la *LGIPE* y 27, párrafo 2 del Reglamento citado; por tanto, tienen valor probatorio pleno, ya que no se encuentran desvirtuadas respecto de su autenticidad o contenido.

En el mismo tenor, las documentales allegadas al expediente por el partido político denunciado, constituyen documentales privadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 22, numeral 1, fracción II del *Reglamento de Quejas*; por lo que, por sí mismas, carecen de valor probatorio pleno, y sólo alcanzarán ese grado cuando, al



Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio, generen convicción en este *Consejo General* sobre la veracidad de los hechos a que se refieren, ello al tenor de lo preceptuado en los artículos 462, párrafo 3 de la *LGIE*, y 27, párrafo 3, del Reglamento en mención.

En este sentido, toda vez que los **once** denunciantes niegan haber otorgado su consentimiento, que su afiliación se comprobó por la autoridad electoral competente, y que el *PAN* no cumplió su carga para demostrar que la afiliación sí se solicitó voluntariamente; esta autoridad electoral considera que existe una vulneración al derecho de afiliación de los quejosos y que, intrínsecamente, para la configuración de esa falta utilizaron sin autorización sus datos personales, lo cual, debe ser considerado por esta autoridad para la imposición de la sanción que, en cada caso, amerite.

Ahora bien, por lo que respecta a Linda Guadalupe Navarrete López, José Adolfo San Román Santiago, Andrés López Lujan, Alfredo Andrés Mesa Luna, Tomasa Alarcón Elox, Luis Fernando Nava Águila y Emmanuel Alonso López Bernal, cabe hacer mención que el *PAN* señaló que los citados ciudadanos causaron baja el quince de noviembre de dos mil diecisiete, pero al respecto debe decirse que tal mención no se vincula con la *Litis*, ni resulta idónea para desvirtuar la conducta imputada, puesto que los quejosos se duelen de que fueron afiliados al partido político denunciado sin su consentimiento, sin que el partido denunciado haya aportado las constancias de afiliación de las que se desprenda que los quejosos manifestaron su conformidad para pertenecer a esa fuerza política, de ahí que resulta incontrovertible que las afiliaciones denunciadas incumplen con los requisitos legales.

Por lo anterior, este órgano colegiado considera pertinente declarar **fundado** el presente procedimiento, pues se concluye que el señalado instituto político infringió las disposiciones electorales tendentes a demostrar la libre afiliación de los **once ciudadanos** antes referidos, quienes aparecieron como afiliados a dicho instituto político, por no demostrar el acto volitivo de éstos para permanecer agremiados a ese partido.



Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

En efecto, como se demostró anteriormente, los denunciantes que aparecieron afiliados al *PAN*, manifestaron que en momento alguno otorgaron su consentimiento para ello, siendo que dicho instituto político no demostró lo contrario, por lo que se actualiza la violación al derecho fundamental de libre afiliación garantizado desde la Constitución y la ley, según se expuso.

Así pues, el *PAN*, en los once casos analizados, no demostró que las afiliaciones se realizaron a través del procedimiento que prevé su normativa interna, ni mediante algún otro procedimiento distinto en el que se hiciera constar que dichos ciudadanos hayan dado su consentimiento para ser afiliados, ni mucho menos que hayan permitido o entregado datos personales para ese fin, los cuales se estiman necesarios para procesar las afiliaciones, dado que estos elementos se constituyen como insumos obligados para, en su momento, llevar a cabo una afiliación, de ahí que esto sea necesario e inescindible.

Con base en ello, ante la negativa de los denunciantes de haberse afiliado al *PAN*, correspondía a dicho instituto político demostrar, a través de pruebas idóneas, que la afiliación se llevó a cabo a través de los mecanismos legales para ello, en donde constara fehacientemente la libre voluntad de los hoy promoventes, lo que no hizo, pues como en cada caso se detalló, las documentales aportadas resultan insuficientes para acreditar el ejercicio libre, personal y voluntario del derecho de afiliación a dicho instituto político.

Es decir, dicho instituto político debió demostrar, con documentación soporte o pruebas idóneas, que dichas afiliaciones se realizaron de forma libre o voluntaria, o bien, que la aparición del nombre y datos de los quejosos en su padrón de militantes, fue consecuencia de un error involuntario o de alguna circunstancia diversa, pero no lo hizo.

Esto último es relevante, porque, como se expuso, la afiliación al *PAN* implica, además de un acto volitivo y personal, la exhibición o presentación voluntaria de documentos en los que se incluyen datos personales, siendo que, en el caso, no se demostró el consentimiento para el uso de ese tipo de información personal que pudiera haber servido de base o justificación al partido político para afiliar a los ahora quejosos.



Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

Entonces, podemos afirmar que el presunto uso indebido de datos personales, tiene íntima vinculación con la indebida afiliación de los siete quejosos sobre los que se declara fundado el presente procedimiento, lo cual ya quedó debidamente acreditado y, como consecuencia de ello, merece la imposición de las sanciones que se determinarán en el apartado correspondiente.

Cabe referir que a similar conclusión arribó este Consejo General en la resolución INE/CG787/2016, de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/EOA/CG/5/2016 y su acumulado UT/SCG/Q/PRD/JL/SIN/6/2016, derivado de una falta de la misma naturaleza a la que aquí se estudia, en donde se determinó que el uso de datos personales poseía un carácter intrínseco o elemento esencial para la configuración de una afiliación indebida.

Ahora bien, más allá de la determinación de responsabilidad al partido político y la consecuente imposición de sanción, esta autoridad debe tutelar el derecho fundamental de afiliación de los quejosos, es decir, estamos frente a la defensa de un derecho humano de naturaleza político-electoral, que en términos del artículo 1° de la Constitución Federal debe ser respetado, protegido y garantizado por todas las autoridades del Estado Mexicano.

En tal sentido, se tiene que la voluntad de los denunciantes es no pertenecer a este partido político, por lo que se debe vincular al *PAN* para que, de ser el caso, en el supuesto que los quejosos continúen en su padrón de militantes, sean dados de baja inmediatamente e informe lo anterior mediante oficio a la *DEPPP*, para que a su vez, en el ámbito de sus atribuciones, proceda conforme a Derecho.

Cabe precisar que la anterior conclusión, es congruente con lo resuelto por la Sala Superior en el juicio ciudadano SUP-JDC-2/2017, de cinco de enero del año en curso, en donde concluyó en la necesidad de comunicar la intención de un ciudadano de no pertenecer a las filas de un determinado partido político, a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, procediera a dar de baja al ciudadano en el padrón de militantes así como de cualquier otra base de datos con que cuente el INE, que lo vincule con un instituto político en particular.

Por tanto, es de concluirse que, a partir de las constancias que obran en autos, se tiene acreditado que el *PAN* vulneró el derecho de libertad de afiliación —utilizando



Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

indebidamente datos personales—, respecto de los ciudadanos Linda Guadalupe Navarrete López, José Adolfo San Román Santiago, Andrés López Lujan, Alfredo Andrés Mesa Luna, Tomasa Alarcón Elox, Luis Fernando Nava Águila, Emmanuel Alonso López Bernal, Mónica Ramírez Fortis, Francisco Javier Ruíz Cruz, Ingrid Yamilet Santos Navarrete y Carlos Ocaña Corte

En consecuencia, al determinarse que el *PAN* infringió la norma electoral ya señalada, lo conducente es establecer la sanción correspondiente.

CUARTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS SANCIONES.

Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión de la falta denunciada, así como la responsabilidad por parte del *PAN*, procede ahora determinar la sanción correspondiente, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 355, párrafo 5 del *COFIPE*, cuyo contenido se reproduce en el diverso 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, relativo a la gravedad de la responsabilidad en que se incurra; el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas; las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios de ejecución de la falta; y, en su caso, la reincidencia y el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción.

En relación con ello, la *Sala Superior* ha sostenido que para individualizar la sanción a imponer a un partido político por la comisión de alguna irregularidad se deben tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción u omisión que produjo la infracción electoral.

1. Calificación de la falta

A) Tipo de infracción

Tipo de infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones jurídicas infringidas
La infracción se cometió por una acción del partido	La conducta fue la afiliación indebida y el uso no autorizado de	Artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la <i>Constitución</i> ; 5, párrafo 1; 38,



**Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL**

**CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018**

Tipo de infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones jurídicas infringidas
político denunciado, que transgredió disposiciones de la Constitución, del COFIPE, la LGIPE y la LGPP.	los datos personales de once ciudadanos.	párrafo 1, incisos a) y e) del COFIPE; 443, párrafo 1, incisos a) y n); de la LGIPE, y 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) de la LGPP.

B) Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas)

Por bienes jurídicos se deben entender aquellos que se protegen a través de las normas jurídicas que pueden ser vulnerados con las conductas tipificadas o prohibidas.

En el caso, las disposiciones legales vulneradas tienden a preservar el derecho de los ciudadanos de decidir libremente si desean o no afiliarse a un partido político, dejar de formar parte de él o no pertenecer a ninguno, el cual se erige como un derecho fundamental que tienen los individuos para tomar parte en los asuntos políticos del país.

En el caso concreto, se acreditó que el PAN incluyó indebidamente en su padrón de afiliados, a **once** ciudadanos quejosos, sin demostrar que para incorporarlos medió la voluntad de éstos de inscribirse como militantes de dicho instituto político, violentando con ello la norma electoral, en específico las disposiciones precisadas en el recuadro inserto en el subapartado previo.

A partir de esta premisa, es válido afirmar que el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas, radica en garantizar el derecho de los ciudadanos mexicanos, de optar libremente por ser o no militante de algún partido político, lo cual implica la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de que quienes figuran en sus respectivos padrones de militantes, efectivamente consintieron libremente en ser sus agremiados.

Por otra parte, como se analizó, para la indebida afiliación acreditada en el expediente que se resuelve se usaron los datos personales de los promoventes sin



Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

que éstos hubiesen otorgado su consentimiento para ello, lo cual constituye un elemento accesorio e indisoluble de la infracción consistente en la afiliación indebida.

En efecto, si bien es cierto, a partir de las constancias que obran en autos no está demostrado que los datos personales hubieran sido utilizados con un propósito diverso a la afiliación indebida en sí misma, o bien su difusión frente a terceros, lo es también que dicha información fue necesaria para materializar la incorporación de los datos de los actores al padrón de militantes del partido político denunciado.

De ahí que esta situación debe considerarse al momento de fijar la sanción correspondiente al partido político involucrado.

C) Singularidad o pluralidad de la falta acreditada

Al respecto, cabe señalar que aun cuando se acreditó que el *PAN* transgredió lo establecido en las disposiciones constitucionales y legales y aún las de la normativa interna del partido político, esta situación no conlleva estar en presencia de una pluralidad de infracciones o de faltas administrativas, toda vez que, en el caso, únicamente se acreditó la infracción al derecho político electoral de libertad de afiliación al instituto político, quien incluyó en su padrón de militantes a los hoy quejosos, sin demostrar el consentimiento previo para ello.

D) Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como son:

- a) Modo.** En el caso bajo estudio, las irregularidades atribuibles al *PAN* consistieron en inobservar lo establecido en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a) y e) del *COFIPE*; 443, párrafo 1, inciso a) y n), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) de la *LGPP*, al incluir en su padrón de afiliados a **once**



**Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL**

**CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018**

ciudadanos, sin tener la documentación soporte que acredite fehacientemente la voluntad de éstos de pertenecer a las filas de dicho instituto político.

- b) Tiempo.** En el caso concreto, como se razonó en el considerando que antecede, por cuanto hace a las afiliaciones sin el consentimiento previo de los ciudadanos, acontecieron en diversos momentos, mismos que se resumen en la tabla siguiente:

No.	Ciudadano	Fecha de afiliación
1	Linda Guadalupe Navarrete López	13/01/2014
2	Mónica Ramírez Fortis	28/01/2014
3	José Adolfo San Román Santiago	24/02/2016
4	Francisco Javier Ruíz Cruz	04/02/2014
5	Ingrid Yamilet Santos Navarrete	03/04/2014
6	Andrés López Lujan	03/04/2017
7	Alfredo Andrés Meza Luna	09/03/1998
8	Carlos Ocaña Corte	30/10/2006
9	Tomasa Alarcón Elox	02/08/2014
10	Luis Fernando Nava Aguilar	23/12/2013
11	Emmanuel Alonso López Bernal	24/02/2014

- c) Lugar.** Con base en las razones plasmadas en los escritos de denuncias, se deduce que las faltas atribuidas al *PAN* se cometieron de la siguiente manera:

No.	Ciudadano	Entidad
1	Linda Guadalupe Navarrete López	Sinaloa
2	Mónica Ramírez Fortis	Ciudad de México
3	José Adolfo San Román Santiago	Hidalgo
4	Francisco Javier Ruíz Cruz	Ciudad de México
5	Ingrid Yamilet Santos Navarrete	Veracruz
6	Andrés López Lujan	Zacatecas
7	Alfredo Andrés Meza Luna	Veracruz
8	Carlos Ocaña Corte	Tlaxcala
9	Tomasa Alarcón Elox	Veracruz
10	Luis Fernando Nava Aguilar	Jalisco
11	Emmanuel Alonso López Bernal	México

E) Intencionalidad de la falta (comisión dolosa o culposa)



Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

Se considera que en el caso existe una conducta **dolosa** por parte del *PAN*, en violación a lo previsto en los artículos ya establecidos en los párrafos anteriores.

La falta se califica como **dolosa**, por lo siguiente:

- El *PAN* es un Partido Político Nacional y, por tanto, tiene el estatus de **entidad de interés público**, de conformidad con el artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de asociación en materia política, previsto en los artículos 9°, párrafo primero, 35, fracción III, y 41, párrafo segundo, fracción I, de la *Constitución*; 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- El *PAN*, como cualquier otro partido político, está **sujeto al cumplimiento de las normas que integran el orden jurídico nacional e internacional** y obligado a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático, respetando los derechos de los ciudadanos, de acuerdo con el artículo 25 de la *LGPP*.
- La libre afiliación a un partido político es un **derecho fundamental** cuyo ejercicio requiere de la manifestación personal y directa de voluntad de cada ciudadano, en términos del precitado artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son un espacio para el ejercicio de derechos fundamentales en materia político-electoral, partiendo de los fines que constitucionalmente tienen asignados, especialmente como promotores de la participación del pueblo en la vida democrática y canal para el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, por lo que a su interior el ejercicio de tales derechos no solo no se limita, sino por el contrario, **se ensancha y amplía**.



Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

- Todo partido político, tiene la **obligación de respetar la libre afiliación** y, consecuentemente, de cuidar y vigilar que sus militantes sean personas que fehacientemente otorgaron su libre voluntad para ese efecto.
- El ejercicio del derecho humano a la libre afiliación a cualquier partido político, conlleva un **deber positivo a cargo de los institutos políticos**, consistente no sólo en verificar que se cumplen los requisitos para la libre afiliación a su padrón, sino en **conservar, resguardar y proteger la documentación o pruebas en donde conste la libre afiliación** de sus militantes, en términos de lo dispuesto en los artículos 35, fracción III, 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1 y 38, párrafo 1, incisos a) y e), del *COFIPE*; 2, párrafo 1, incisos a y b, y 25, incisos a y e, de la *LGPP*.
- El derecho de participación democrática de la ciudadanía, a través de la libre afiliación a un partido político, supone que éste sea el receptáculo natural para la verificación de los requisitos y para la guarda y custodia de la documentación o pruebas en las que conste el libre y genuino ejercicio de ese derecho humano, de lo que se sigue que, en principio, ante una controversia sobre afiliación, **corresponde a los partidos políticos involucrados, demostrar que la afiliación atinente fue libre y voluntaria**.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La afiliación indebida o sin consentimiento a un partido político, es una violación de orden constitucional y legal que **requiere o implica para su**



Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

configuración, por regla general, la utilización indebida de datos personales de la persona o ciudadano afiliado sin su consentimiento.

Tomando en cuenta las consideraciones jurídicas precisadas, en el presente caso la conducta se considera dolosa, porque:

- 1) Los quejosos adujeron, en los casos a que se refiere el Apartado B, del Considerando TERCERO de esta Resolución, que no solicitaron voluntariamente, en momento alguno su registro o incorporación como militantes al *PAN*.
- 2) Quedó acreditado que los quejosos aparecieron en el padrón de militantes del *PAN*.
- 3) El partido político denunciado no demostró que las afiliaciones de los quejosos se hubieran realizado a través de los mecanismos legales y partidarios conducentes, ni mucho menos que ello se sustentara en la expresión libre y voluntaria de los denunciantes.
- 4) El *PAN* no demostró ni probó que la afiliación de los quejosos fuera consecuencia de algún error insuperable, o derivado de alguna situación externa que no haya podido controlar o prever, ni ofreció argumentos razonables, ni elementos de prueba que sirvieran de base, aun indiciaria, para estimar que la afiliación de los quejosos fue debida y apegada a Derecho, no obstante que, en principio, le corresponde la carga de hacerlo.

F) Condiciones externas (contexto fáctico)

Resulta atinente precisar que la conducta desplegada por el *PAN*, se cometió al afiliar indebidamente a **once ciudadanos**, sin demostrar al acto volitivo de éstos tanto de inscribirse en su padrón de militantes como de haber proporcionado sus datos personales para ese fin.

Así, se estima que la finalidad de los preceptos transgredidos, consiste en garantizar el derecho de libre afiliación y la protección de los datos personales de los



Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

ciudadanos mexicanos y que la conducta se acredita ante la ausencia de los documentos atinentes que permitan demostrar el acto de voluntad de los ciudadanos quejosos de militar en los distintos partidos políticos, ni para el uso de sus datos personales.

2. Individualización de la sanción.

Una vez sentadas las anteriores consideraciones, **y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción**, se procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:

A. Reincidencia

Por cuanto a la **reincidencia** en que pudo haber incurrido el partido materia de esta Resolución, este organismo electoral autónomo considera que **no se actualiza**.

De conformidad con el artículo 458, párrafo 6 de la *LGIFE*, se considerará reincidente a quien, habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el mencionado *Código*, incurra nuevamente en la misma conducta infractora.

Al respecto, la *Sala Superior* ha establecido que los elementos mínimos que se deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son los siguientes:

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de la falta);
2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que ambas protegen el mismo bien jurídico; y,
3. Que en ejercicios anteriores el infractor **haya sido sancionado por esa infracción mediante Resolución o sentencia firme**.



Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

Lo anterior se desprende del criterio sostenido por la Sala Superior, a través de la Jurisprudencia 41/2010, cuyo rubro es: **REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.**⁹⁴

De lo expuesto se advierte que un infractor es reincidente siempre que habiendo sido declarado responsable de una infracción por resolución ejecutoria, vuelva a cometer una falta de similar naturaleza a aquella por la que fue sancionado con anterioridad.

En ese tenor, la reincidencia, en el ámbito del derecho administrativo sancionador se actualiza, cuando el infractor que ha sido juzgado y condenado por sentencia firme, incurre nuevamente en la comisión de la misma falta.

En este sentido, debe precisarse que, en el presente asunto, no puede considerarse actualizado dicho supuesto por cuanto hace al *PAN*, pues en los archivos de este Instituto, no obra alguna resolución en la que se haya sancionado a ese ente político por faltas como la que se sanciona por esta vía, que se hayan dictado con anterioridad a los hechos materia de la presente denuncia.

B. Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, la infracción debe calificarse dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso concreto, contando con una amplia facultad discrecional para calificar la gravedad o levedad de una infracción.

Bajo este contexto, una vez acreditada la infracción, esta autoridad electoral debe determinar, en principio, si la falta fue levísima, leve o grave, y en caso del último supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor.

Luego entonces, debe mencionarse que el criterio que esta autoridad ha considerado para la imposición de la calificación de la infracción, en el presente asunto, tomará en consideración los elementos objetivos y subjetivos que

⁹⁴ De observancia obligatoria, en términos del artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.



Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

concurrieron en la acción que produjo la infracción electoral, tales como el tipo de infracción; el bien jurídico tutelado; singularidad y pluralidad de la falta; las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el dolo o culpa; la reiteración de infracciones; las condiciones externas y los medios de ejecución.

En este sentido, para la graduación de la falta, se deben tomar en cuenta las siguientes circunstancias:

- Quedó acreditada la infracción al derecho de libre afiliación de los ciudadanos al partido político, pues se comprobó que el *PAN* afilió diversos ciudadanos sin demostrar contar con la documentación que acredite que medió su voluntad de pertenecer o estar inscritos a dicho instituto político.
- El bien jurídico tutelado por las normas transgredidas es garantizar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos mexicanos, de optar por ser o no militante de algún partido político, y la obligación de éstos es velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de la voluntad de quienes deseen pertenecer agremiados a los distintos partidos políticos.
- Para materializar la indebida afiliación de los denunciados, se utilizaron indebidamente sus datos personales, pues los mismos eran necesarios para formar el padrón de afiliados del partido político denunciado.
- No existió un beneficio por parte del *PAN*, o lucro ilegalmente logrado, ni tampoco existió un monto económico involucrado en la irregularidad.
- No existió una vulneración reiterada de la normativa electoral.
- No implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez que se configuró una sola conducta infractora.
- No se afectó en forma sustancial la preparación o desarrollo de algún Proceso Electoral.



Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

- No existe reincidencia por parte del *PAN*.

Por lo anterior, y en atención a los elementos objetivos precisados con antelación, se considera procedente **calificar la falta** en que incurrió el partido político como de **gravedad ordinaria**, toda vez que como se explicó en el apartado de intencionalidad, el *PAN*, dolosamente, infringió el derecho de libre afiliación de los hoy quejosos, lo que constituye una violación a un derecho fundamental de los ciudadanos reconocido en la *Constitución*.

C. Sanción a imponer

Ahora bien, la mecánica para la individualización de la sanción, una vez que se tenga por acreditada la falta y la imputabilidad correspondientes, consiste en imponer al infractor, por lo menos, el mínimo de la sanción.

Así, una vez ubicado en el extremo mínimo, se torna necesario apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de ejecución de los hechos, lo que puede constituir un punto de gravitación para transitar del punto inicial, hacia uno de mayor cuantía⁹⁵.

El artículo 354, párrafo 1, inciso a) del *COFIPE*, cuyo contenido es congruente con el diverso 456, párrafo 1, inciso a) de la *LGIPE*, dispone el catálogo de sanciones a imponer cuando se trate de partidos políticos, como acontece en el caso particular, siendo estas: amonestación pública; multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para la Ciudad de México; reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda; con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita; y en los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la *Constitución* y de la *LGIPE*, con la cancelación de su registro como partido político.

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción (especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la infracción

⁹⁵ Véase la tesis XXVIII/2003 de la Sala Superior, de rubro SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.



**Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL**

**CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018**

acreditada), así como la conducta realizada por el *PAN* en el caso concreto, se determina que debe ser objeto de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares del incumplimiento a la ley, sin que ello implique que ésta incumpla con una de sus finalidades, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares que también pudieran afectar los valores protegidos por la norma transgredida.

Para determinar el tipo de sanción a imponer, debe recordarse que la *LGIPE*, confiere a la autoridad electoral, cierta discrecionalidad para elegir, dentro del catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y que a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra persona (en la especie partidos políticos), realicen una falta similar.

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una potestad sancionadora que le permite valorar a su arbitrio las circunstancias que se actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si se toma en cuenta que ni el *COFIPE* ni la *LGIPE* determinan pormenorizada y casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha potestad; por el contrario, solo establecen las bases genéricas para el ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.

Con base en lo anterior, este *Consejo General* estima que, derivado de las circunstancias que concurrieron a la infracción consistente en la afiliación sin consentimiento de once ciudadanos atribuida al *PAN*, justifican la imposición de la sanción prevista en la fracción II, del artículo 354, párrafo 1, inciso a) del *COFIPE*,



Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

cuyo contenido se replica en el diverso 456, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la *LGIFE*, consistente en una **MULTA unitaria por cuanto hace a cada uno de los once ciudadanos sobre quienes se cometió la falta acreditada**, toda vez que se considera que tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa, ya que una amonestación pública sería insuficiente e inadecuada para prevenir la comisión futura de esta infracción; mientras que las consistentes en reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución y la cancelación del registro como partido político resultarían de carácter excesivo, y la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral sería inaplicable en el presente asunto.

Ahora bien, es de explorado derecho que las autoridades al momento de imponer una sanción pecuniaria deben respetar los límites que la propia ley establece, al fijar un monto mínimo y uno máximo, dejando al arbitrio de la autoridad determinar cuál es el aplicable, y por otra parte, deberá expresar las circunstancias de hecho que justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá atender tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la graduación de la sanción a imponer.

En este orden de ideas, es pertinente hacer notar, que ha sido criterio de esta autoridad, al resolver los procedimientos UT/SCG/Q/EOA/CG/5/2016 y su acumulado, y UT/SCG/Q/MECG/JD06/CHIH/4/2016, el dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis y siete de marzo de dos mil diecisiete, respectivamente —y que fue reiterado en el diverso SCG/Q/FSG/CG/33/INE/80/2014 Y SU ACUMULADO SCG/Q/JAEB/JL/CHIH/37/INE/84/2014, resuelto por este órgano máximo de dirección el ocho de septiembre de dos mil diecisiete, bajo la clave INE/CG401/2017—, en los que se sancionó por una indebida afiliación de un ciudadano, en cada caso, con una multa equivalente a 642 (seiscientos cuarenta y dos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, al momento de la comisión de la conducta, sanción que se estima debe tomarse como base para el presente asunto, si se considera que en dichos asuntos se demostró la comisión de una infracción similar a la que acontece en los casos que aquí se resuelven.



Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

En ese tenor, tomando en cuenta las particularidades que acontecen en esta causa, es claro que la individualización de la sanción aplicada con motivo de la afiliación indebida de los ciudadanos al partido político denunciado, o bien, su no desafiliación, debe resultar proporcional al número de ciudadanos en cuyo perjuicio se cometió la falta, sin perder de vista las condiciones socioeconómicas de cada instituto político, y no simplemente, los hechos denunciados y acreditados en el presente procedimiento, a fin de que la sanción que se imponga resulte efectivamente proporcional sin ser excesiva.

En efecto, para que una multa no resulte excesiva o desproporcionada, la autoridad debe determinar su monto o cuantía, **tomando en cuenta** las circunstancias objetivas y subjetivas que rodean la infracción, entre otras, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, y el resto de los elementos por los cuales esta autoridad arribó a la calificación de gravedad del hecho infractor, para así determinar individualizadamente la multa que corresponda.

De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una actuación reglada, consistente en tomar en consideración, de manera razonada y con la motivación precisa, los elementos, criterios y pautas que para tal fin se deduzcan del ordenamiento en su conjunto o del sector de éste afectado, y en particular, los que se hubiesen podido establecer de la norma jurídica aplicable.

A efecto de lo anterior, esta autoridad goza de cierta discrecionalidad para individualizar la sanción derivada de una infracción, tomando en consideración la graduación de la sanción, lo cual resulta eminentemente casuístico y depende de las circunstancias concurrentes del caso concreto, partiendo siempre del monto mínimo, que corresponde a la simple demostración de la conducta ilegal, cuestión que tiene sustento en la tesis relevante XXVIII/2003,⁹⁶ emitida por la Sala Superior, misma que a letra dice:

SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS

⁹⁶ Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 7, Año 2004, página 57



Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

CONCURRENTES.- *En la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, conduce automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de inmediato y sin más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto de la sanción.*

Ahora bien, a juicio de esta autoridad y atendiendo a la gravedad de la falta, con base en lo dispuesto en la fracción II del artículo 456 de la *LGIFE*, lo procedente es imponer **multas** equivalentes a **seiscientos cuarenta y dos** días de salario mínimo general para el Distrito Federal, para los casos de Linda Guadalupe Navarrete López, Mónica Ramírez Fortis, Francisco Javier Ruiz Cruz, Ingrid Yamilet Santos Navarrete, Alfredo Andrés Meza Luna, Carlos Ocaña Corte, Tomasa Alarcón Elox, Luis Fernando Nava Águila y Emmanuel Alonso López Bernal, de quienes se considera fueron afiliados indebidamente y que aparecen en el padrón de afiliados del denunciado.

No obstante, a fin de adoptar la postura, más favorable para el partido político y reducir a la mínima expresión posible el carácter represor con que actúa el estado en los procedimientos de tipo sancionados, es que para el cálculo de la multa correspondiente, se debe tomar en cuenta el salario mínimo vigente al momento de realizar la afiliación y, obtenido el monto correspondiente, deberá hacerse la conversión a Unidades de Medida y Actualización.

Lo anterior, tiene sustento en la Jurisprudencia **10/2018**, emitida por el Tribunal Electoral, de rubro **MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE**



Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN.⁹⁷

En este mismo sentido, con base en el dispositivo antes precisado, se imponen sendas **multas** equivalentes a **seiscientos cuarenta y dos** Unidades de Medida y Actualización, vigentes en dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, al partido político denunciado, **para el caso de José Adolfo San Román Santiago y Andrés López Lujan, respectivamente**, quienes también fueron afiliadas indebidamente.

Cabe precisar que igual sanción, ha sido impuesta por este *Consejo General*, al emitir diversas resoluciones que han resuelto procedimientos ordinarios sancionadores por indebidas afiliaciones y, que además han sido confirmadas por la *Sala Superior*, como son: INE/CG444/2018, confirmada a través del **SUP-RAP-138/2018**; INE/CG448/2018, confirmada en el **SUP-RAP-137/2018**; INE/CG446/2018, confirmada a través del **SUP-RAP-141/2018**, e INE/CG537/2018, confirmada en el **SUP-RAP-170/2018**, entre otras.

Al respecto, es un hecho notorio que se invoca en términos de lo establecido en el artículo 358 del *COFIPE*, cuyo contenido es congruente con el diverso 461 de la *LGIPE*, que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fija anualmente los montos respectivos, mismos que al ser relacionados con las fechas de afiliación y de presentación de las renunciaciones, para obtener la sanción que corresponde a cada partido político infractor, por cuanto hace a cada uno de los ciudadanos indebidamente afiliados, arrojan lo siguiente:

Ciudadanos que fueron afiliados indebidamente		
Total de quejosos	Salario mínimo / UMA	Sanción a imponer
Afiliación en 1998		
1	\$30.20	\$19,388.40
Afiliación en 2006		
1	\$48.67	\$31,246.14
Afiliación en 2013		

⁹⁷ Consultable en la liga electrónica
<http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=UNIDAD,DE,MEDIDA,DE,ACTUALIZACI%C3%93N>



**Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL**

**CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018**

Ciudadanos que fueron afiliados indebidamente		
Total de quejosos	Salario mínimo / UMA	Sanción a imponer
1	\$64.76	\$41,575.92
Afiliación en 2014		
6	\$67.29	\$259,201.08
Afiliación en 2016		
1	\$73.04	\$46,891.68
Afiliación en 2017		
1	\$75.49	\$48,464.58
TOTAL		\$446,767.80
[Cifra calculada al segundo decimal, salvo error aritmético]		

Ahora bien, es importante no perder de vista que mediante reforma al artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la *Constitución* —efectuada por decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación—, se determinó que el salario mínimo no podrá ser utilizado para fines ajenos a su naturaleza, esto es, como índice, unidad, base, medida o referencia para fijar el monto de obligaciones o sanciones.

En esas condiciones, lo procedente es transformar la sanción que se considera idónea, expresada en salarios mínimos, a Unidades de Medida y Actualización (con excepción de los casos antes precisados), para lo cual es necesario dividir el monto inicial (seiscientos cuarenta y dos días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México multiplicado por el salario mínimo vigente en cada año señalado en el cuadro), entre el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización, misma que equivale, para el ejercicio fiscal en curso, a \$80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.).

Sanción por ciudadano:

Ciudadano de quien se realiza la conversión a Unidades de Medida y Actualización, toda vez que su indebida afiliación fue anterior al año dos mil dieciséis:



CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

No.	Ciudadano	Fecha de afiliación	Multa impuesta en SMVG	Valor SMGV	Valor UMA vigente	Sanción en UMAS (A*B)/C ⁹⁸	SANCIÓN A IMPONER
			A	B	C	D	(C*D)
1	Linda Guadalupe Navarrete López	13/01/2014	642	\$67.29	\$80.60	535.98	\$43,199.98
2	Mónica Ramírez Fortis	28/01/2014	642	\$67.29	\$80.60	535.98	\$43,199.98
3	Francisco Javier Ruiz Cruz	04/02/2014	642	\$67.29	\$80.60	535.98	\$43,199.98
4	Ingrid Yamilet Santos Navarrete	03/04/2014	642	\$67.29	\$80.60	535.98	\$43,199.98
5	Alfredo Andrés Meza Luna	09/03/1998	642	\$30.20	\$80.60	240.55	\$19,388.33
6	Carlos Ocaña Corte	30/10/2006	642	\$48.67	\$80.60	387.66	\$31,245.39
7	Tomasa Alarcón Elox	02/08/2014	642	\$67.29	\$80.60	535.98	\$43,199.98
8	Luis Fernando Nava Águila	23/12/2013	642	\$64.76	\$80.60	515.83	\$41,575.89
9	Emmanuel Alonso López Bernal	24/02/2014	642	\$67.29	\$80.60	535.98	\$43,199.98
TOTAL						\$351,409.49	

Ahora bien, para los dos ciudadanos quienes fueron afiliados indebidamente posterior a dos mil dieciséis, de quienes se impone la sanción con base en la Unidad de Medida de Actualización vigente en ese año, corresponden las siguientes cantidades:

No.	Ciudadano	Fecha de afiliación	Multa impuesta en UMA	Valor UMA	SANCIÓN A IMPONER
1	José Adolfo San Román Santiago	24/02/2016	642	\$73.04	\$46,891.68
2	Andrés López Lujan	03/04/2017	642	\$75.49	\$48,464.58

⁹⁸ Cifra al segundo decimal



Dicha sanción se considera adecuada para castigar la conducta que nos ocupa, pues sin ser gravosa, sí puede inhibir al *PAN* para que en el futuro vigile el cumplimiento de las normas de la materia.

D. El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico derivado de la infracción

Se estima que, respecto de la infracción cometida por el *PAN*, aun cuando causó un perjuicio al bien jurídico que el legislador buscó proteger, no se cuenta con elementos objetivos para cuantificar el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico ocasionado con motivo de la infracción.

E. Las condiciones socioeconómicas del infractor

Sobre este punto, es preciso señalar que conforme al Acuerdo INE/CG339/2017, emitido por este *Consejo General* el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se estableció que, entre otros, *PAN* recibiría mensualmente en el presente ejercicio, por concepto de financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes, la siguiente cantidad:

SUJETO	Monto del financiamiento público para el sostenimiento de Actividades Ordinarias del mes de octubre de 2018
<i>PAN</i>	\$68, 993, 261.00

Ahora bien, según fue informado por la *DEPPP*, a través del oficio **INE/DEPPP/DE/DPPF/6010/2018**, el monto de la ministración mensual correspondiente al mes de octubre de dos mil dieciocho, debía ser ajustado en función de las sanciones administrativas pendientes de cubrir por dicho instituto político nacional, por lo cual la cifra total a recibir sería la siguiente:



CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

SUJETO	IMPORTE DE LA MINISTRACIÓN DE OCTUBRE DE 2018	IMPORTE TOTAL DE LAS SANCIONES OCTUBRE 2018	IMPORTE NETO DE LA MINISTRACIÓN
PAN	\$68, 993, 261.00	\$916,721.00	\$68,076,540

F. Impacto en las actividades del sujeto infractor

Derivado de lo anterior, se considera que la multa impuesta a *PAN*, no es de carácter gravoso en virtud de que la cuantía líquida, respecto al monto del financiamiento que recibirá por concepto de actividades ordinarias permanentes en el mes de octubre del año en curso, los siguientes porcentajes:

Año	Monto de la sanción por ciudadano	Ciudadanos indebidamente afiliados	% de la ministración mensual por ciudadano ⁹⁹
1998	\$19,388.33	1	0.02%
Año	Monto de la sanción por ciudadano	Ciudadanos indebidamente afiliados	% de la ministración mensual por ciudadano ¹⁰⁰
2006	\$31,245.39	1	0.04%
Año	Monto de la sanción por ciudadano	Ciudadanos indebidamente afiliados	% de la ministración mensual por ciudadano ¹⁰¹
2013	\$41,575.89	1	0.06%
Año	Monto de la sanción por ciudadano	Ciudadanos indebidamente afiliados	% de la ministración mensual por ciudadano ¹⁰²
2014	\$259,199.88	6	0.06%
Año	Monto de la sanción por ciudadano	Ciudadanos indebidamente afiliados	% de la ministración mensual por ciudadano ¹⁰³
2016	\$46,891.68	1	0.06%
Año	Monto de la sanción por ciudadano	Ciudadanos indebidamente afiliados	% de la ministración mensual por ciudadano ¹⁰⁴
2017	\$48,464.58	1	0.07%

⁹⁹ Cantidades expresadas hasta el segundo decimal.

¹⁰⁰ Cantidades expresadas hasta el segundo decimal.

¹⁰¹ Cantidades expresadas hasta el segundo decimal.

¹⁰² Cantidades expresadas hasta el segundo decimal.

¹⁰³ Cantidades expresadas hasta el segundo decimal.

¹⁰⁴ Cantidades expresadas hasta el segundo decimal.



**Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL**

**CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018**

Por consiguiente, la sanción impuesta a *PAN* no es de carácter gravoso, si se toma en cuenta el porcentaje que representa con relación a la ministración mensual correspondiente al mes de agosto de este año.

De esta forma, debe señalarse que esta autoridad considera que la multa impuesta constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción cometida por *PAN* (especialmente los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la falta); su grado de responsabilidad en el actuar ilegal, y su capacidad socioeconómica.

Dada la cantidad que se impone como multa al partido antes citado, comparada con el financiamiento que recibe del *INE* para el mes de agosto de dos mil dieciocho, para cumplir con sus obligaciones ordinarias, resulta evidente que en modo alguno se afecta sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político sancionado.

En efecto, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues el partido político de mérito —tal como quedó explicado con anterioridad— está en posibilidad de pagar sin que ello afecte sus operaciones ordinarias, además de que las sanciones son proporcionales a las faltas cometidas y se estima que, sin resultar excesivas ni ruinosas, pueden generar un efecto inhibitorio, lo cual —según lo ha establecido la *Sala Superior* en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-250/2009¹⁰⁵, es precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción.

QUINTO. CANCELACIÓN DE REGISTRO DE LOS QUEJOSOS COMO MILITANTES. Conforme con lo razonado en la presente determinación, los doce denunciantes en el presente asunto manifestaron su deseo de no pertenecer al *PAN*; en tal sentido, con la finalidad de lograr el respeto a su derecho de libre afiliación, lo procedente es ordenar al instituto político denunciado que, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución**, cancele el registro de los quejosos como sus militantes, en el supuesto que continúen en su padrón de afiliados, con independencia de que se haya determinado la acreditación o no de la infracción denunciada, y hecho lo anterior,

¹⁰⁵ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00250-2009.htm>



Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

de inmediato lo informe a la *DEPPP*, para que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia.

SEXTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, tutelado en el artículo 17 de la Constitución Federal,¹⁰⁶ se precisa que la presente determinación es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el numeral 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como a través del juicio para la protección de los derechos político- electorales del ciudadano, previsto en el artículo 79 del referido ordenamiento legal, para el caso del denunciante.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

PRIMERO. Se declara **infundado** el procedimiento sancionador ordinario, incoado en contra del **Partido Acción Nacional**, al no infringir las disposiciones electorales de libre afiliación respecto de **Sinaí Navarro Aguilar**, en términos de lo establecido en el **Apartado A** del Considerando **TERCERO** de esta Resolución.

SEGUNDO. Se declara **fundado** el procedimiento sancionador ordinario, incoado en contra del **Partido Acción Nacional**, al infringir las disposiciones electorales de libre afiliación de **once (11) ciudadanos**, en términos de lo establecido en el **Apartado B** del Considerando **TERCERO** de esta Resolución.

TERCERO. En términos del Considerando **CUARTO** de la presente Resolución, se impone al *PAN*, **una multa por la indebida afiliación de cada uno de los once (11) ciudadanos**, conforme a los montos que se indican a continuación:

¹⁰⁶ Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL", y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª), Página: 2864, Rubro: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL."



CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

No	Ciudadano	Sanción a Imponer
1	Linda Guadalupe Navarrete López	535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.99 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve punto noventa y nueve pesos 99/100 M. N.) [Ciudadana afiliada en 2014]
2	Mónica Ramírez Fortis	535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.99 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve punto noventa y nueve pesos 99/100 M. N.) [Ciudadana afiliada en 2014]
3	José Adolfo San Román Santiago	642 (seiscientos cuarenta y dos) Unidades de Medida y Actualización, equivalente a \$46,891.68 (Cuarenta y seis mil ochocientos noventa y uno pesos 68/100 M. N.) [Ciudadano afiliado en 2016]
4	Francisco Javier Ruiz Cruz	535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.99 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 99/100 M. N.) [Ciudadano afiliado en 2014]
5	Ingrid Yamilet Santos Navarrete	535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.99 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 99/100 M. N.) [Ciudadana afiliada en 2014]
6	Andrés López Lujan	642 (seiscientos cuarenta y dos) Unidades de Medida y Actualización, equivalente a \$48,464.58 (Cuarenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 58/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 2017]
7	Alfredo Andrés Meza Luna	240.55 (doscientas cuarenta punto cincuenta y cinco) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$19,388.33 (Diecinueve mil trescientos ochenta y ocho pesos 33/100 M. N.) [Ciudadano afiliado en 1998]
8	Carlos Ocaña Corte	387.66 (trescientos ochenta y siete punto sesenta y seis) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$31,245.39 (Treinta y un mil doscientos cuarenta y cinco pesos 39/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 2006]
9	Tomasa Alarcón Elox	535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.99 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 99/100 M. N.) [Ciudadana afiliada en 2014]
10	Luis Fernando Nava Águila	515.83 (quinientos quince punto ochenta y tres) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$41,575.89 (cuarenta y un mil quinientos setenta y cinco pesos 89/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 2013]
11	Emmanuel Alonso López Bernal	535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.99 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 99/100 M. N.) [Ciudadano afiliado en 2014]



Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

CUARTO. En términos de lo establecido en el artículo 458, párrafo 7 de la *LGIPE*, el monto de la multa impuesta al **Partido Acción Nacional**, será deducido, según corresponda, de las siguientes ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba dicho instituto político, una vez que esta resolución haya quedado firme, conforme a lo dispuesto en su Considerando CUARTO.

QUINTO. Con independencia de lo fundado o infundado del asunto, se vincula al **Partido Acción Nacional**, que, de ser el caso que los quejosos continúen en su padrón de afiliados, **sin mayor trámite**, cancele el registro de cada uno de ellos como sus militantes, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución**, y para lo cual se solicita la colaboración de la *DEPPP* a fin de vigilar y corroborar el cumplimiento por parte del partido político denunciado, conforme a lo dispuesto en su Considerando QUINTO.

SEXTO. La presente Resolución es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el artículo 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como a través del juicio para la protección de los derechos político- electorales del ciudadano, previsto en el artículo 79 del referido ordenamiento legal, para el caso de los denunciantes.

Notifíquese personalmente a Linda Guadalupe Navarrete López, Mónica Ramírez Fortis; José Adolfo San Román Santiago, Francisco Javier Ruiz Cruz, Ingrid Yamilet Santos Navarrete, Andrés López Lujan, Alfredo Andrés Meza Luna, Carlos Ocaña Corte, Tomasa Alarcón Elox, Luis Fernando Nava Águila, Emmanuel Alonso López Bernal y Sinaí Navarro Aguilar, así como al *PAN*, por conducto de su representante ante este Consejo General; y por **estrados** a quienes les resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.



CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/50/2018

Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 17 de octubre de 2018, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez.

Se aprobó en lo particular por lo que hace al criterio de reiteración en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por siete votos a favor de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y tres votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles; no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez.

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL**



**DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO**

**EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL**



**LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA**